

PERIODO 122°



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

4^a REUNION – SESION ORDINARIA
31 DE MARZO y 1° DE ABRIL DE 2004

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, licenciado **DANIEL O. SCIOLI**
y del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor **MARCELO A. H. GUINLE**

Secretarios:

Señor **JUAN H. ESTRADA** y señor **CARLOS A. MACHIAROLI**

Prosecretarios:

Señor **JUAN J. CANALS**, señor **JOSE D. CANATA** y señor **RICARDON. GUTIERREZ**



PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.
 AVELÍN, Nancy B.
 BAR, Graciela Y.
 BUSSI, Ricardo A.
 CAFIERO, Antonio F.
 CAPARRÓS, Mabel L.
 CAPITANICH, Jorge M.
 CAPOS, Liliana
 CASTILLO, Oscar A.
 CASTRO, María E.
 COLOMBO, María T.
 CONTI, Diana
 CURLETTI, Mirian B.
 DANIELE, Mario D.
 ESCUDERO, Sonia M.
 FALCÓ, Luis
 FERNÁNDEZ, Nicolás A.
 FERNÁNDEZ de KIRCHNER, Cristina E.
 GALLEGÓ, Silvia E.
 GALLIA, Sergio A.
 GIRI, Haide D.
 GIUSTI, Silvia E.
 GIUSTINIANI, Rubén H.
 GÓMEZ DIEZ, Ricardo
 GUINLE, Marcelo A. H.
 IBARRA, Vilma L.
 JAQUE, Celso A.
 JENEFES, Guillermo R.
 LATORRE, Roxana I.
 LEGUIZAMÓN, María L.
 LESCANO, Marcela F.
 LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
 LOSADA, Mario A.
 MARÍN, Rubén H.
 MARINO, Juan C.
 MARTINAZZO, Luis E.
 MASSONI, Norberto
 MASTANDREA, Alicia E.
 MAYANS, Miguel A.
 MAZA, Ada M.

MENEM, Eduardo
 MERA, Mario R.
 MIRANDA, Julio A.
 MORALES, Gerardo R.
 MÜLLER, Mabel H.
 NEGRE de ALONSO, Liliana T.
 OCHOA, Raúl E.
 OVIEDO, Mercedes M.
 PAZ, Elba A.
 PERCEVAL, María C.
 PICHETTO, Miguel A.
 PRADES, Carlos A.
 PUERTA, Federico R.
 REUTEMANN, Carlos A.
 RÍOS, Roberto F.
 ROSSI, Carlos A.
 SAADI, Ramón E.
 SALVATORI, Pedro
 SANCHEZ, María D.
 SANZ, Ernesto R.
 SAPAG, Luz M.
 TAFFAREL, Ricardo C.
 TERRAGNO, Rodolfo H.
 URQUÍA, Roberto D.
 YOMA, Jorge R.
 ZAVALIA, José L.

AUSENTES CON AVISO:

ARANCIO, Lylia M.
 ISIDORI, Amanda M.
 PINCHETTI, Delia N.

AUSENTE POR ENFERMEDAD:

MARTÍN, Floriana N.

EN COMISION:

MARTÍNEZ PASS de CRESTO, Laura

SUMARIO

1. Izamiento de la **bandera nacional** en el mástil del recinto. (Pág. 1004.)
6. **Asuntos entrados.** (Pág. 1021.)
7. **Lectura y aprobación del plan de labor.** (Página 1021.)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Nosotros no vamos a dar el tratamiento sobre tablas a esta cuestión.

Reconocemos el derecho de los señores senadores por San Luis a plantear esta preocupación. Pero tendrá que circular por las respectivas comisiones.

Vamos a avanzar ahora en el tratamiento del plan de labor con la intervención a Santiago del Estero.

Sr. Presidente. – ¿Está proponiendo una modificación del plan de labor?

Sr. Pichetto. – Corresponde considerar el tema de Santiago del Estero. Me parece que he sido claro. Y para que la señora senadora Avelín no vuelva a pedir el uso de la palabra, nos comprometemos a tratar en quince días la iniciativa que ella presentó respecto del 2 de abril, con una respuesta que no sé si va a ser afirmativa porque, reitero, vamos a hacer las consultas respectivas.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Losada.

Sr. Losada. – Cuando hay una solicitud de un tratamiento sobre tablas, aunque tengamos minoría, se vota. Creo que dado que estamos con esta urgencia no estamos actuando medianamente con el reglamento. Así que les pediría que hiciéramos la votación. Obviamente sabemos el resultado. Pero el esquema del conocimiento del “no” es la votación.

Sr. Presidente. – La Presidencia interpretó de su palabra que usted desistía del planteo del tratamiento sobre tablas.

Primero vamos a votar si habilitamos sobre tablas o no el pedido hecho por los señores senadores por San Luis. Se requieren los dos tercios de los votos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta negativa.

Sr. Presidente. – Queda rechazado el tratamiento sobre tablas.

16

INTERVENCION FEDERAL A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar ahora si se trata sobre tablas el proyecto de

ley enviado en revisión por la Honorable Cámara de Diputados por el que se dispone la intervención federal de la provincia de Santiago del Estero.

Sr. Losada. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Losada.

Sr. Losada. – Quisiera tener el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados. Conocemos el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. No sabemos si hubo modificaciones. Pediría quince minutos de cuarto intermedio en las bancas para poder tener el dictamen.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. – A su derecha, señor presidente, hay un secretario parlamentario. Sería bueno que él leyera el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y nos diéramos por enterados sin la necesidad de esperar que cada uno contara con una copia de la iniciativa.

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario. – (Lee).

Buenos Aires, 31 de marzo de 2004.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara, ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Declárase intervenida la provincia de Santiago del Estero en sus poderes constituidos, para garantizar la forma republicana de gobierno.

Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional designará al interventor federal.

Art. 3º – Dispónese en la provincia intervenida la inmediata caducidad de los mandatos del Poder Ejecutivo y de los miembros del Poder Legislativo y declárase en comisión a los miembros del Poder Judicial.

Art. 4º – Fijase el plazo de la intervención en ciento ochenta (180) días, prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional por un periodo igual. Para asegurar la normalización y pleno funcionamiento de los poderes provinciales el interventor deberá convocar a elecciones.

Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputarán a los créditos del presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2004, en las partidas correspondientes.

Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

EDUARDO O. CAMAÑO.

Eduardo D. Rollano.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Mayans.

Sr. Mayans. – Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto.

Sr. Presidente. – Voy a pedir a los auxiliares que distribuyan copias del texto sancionado por la Cámara de Diputados.

A continuación, corresponde considerar la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador Mayans.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto negativo.

Sr. Presidente. – Queda constancia, señora senadora.

1

CONSTITUCION DE LA CAMARA EN COMISION

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la Cámara en comisión para formular dictamen y designar autoridades.

Sr. Capitanich. – Propongo que se constituya la Cámara en comisión y se confirme a las autoridades de la mesa.

Sr. Presidente. – En consideración la moción formulada por el señor senador por el Chaco.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades para la conferencia.

2

CONFERENCIA

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.

Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión de intervención a la provincia de Santiago del Estero.

Por Secretaria se dará lectura.

–Se lee nuevamente el proyecto de ley en revisión.

Sr. Presidente. – En consideración.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a hablar como miembro informante del bloque Justicialista y, luego, vamos a escuchar la exposición de los señores senadores justicialistas por Santiago del Estero, lo que será muy enriquecedor para este debate y permitirá actuar a esta Cámara con toda la convicción y decisión que este tema requiere.

En primer lugar, digo que el proceso que está viviendo Santiago del Estero no es nuevo; más aún, diría que se trata de un proceso de descomposición que se ha venido acelerando a partir de la última renovación institucional de la provincia de Santiago del Estero.

Señor presidente: hay mucha gente hablando y muchas personas dentro del recinto que no son del Senado...

–Luego de unos instantes:

Sr. Pichetto. – La situación en Santiago del Estero se agravó cuando, a pocos días de haber asumido, el gobernador electo fue prácticamente obligado a renunciar. Y con la renuncia del gobernador asume la vicegobernadora, la señora Aragonés de Juárez.

Indudablemente, el gobierno empezó a tener a partir de ese momento mayores complejidades y fuertes actos de irracionalidad y de discrecionalidad, con acciones que abarcaron a los tres poderes del Estado.

En Santiago del Estero existía un servicio de seguridad y de informaciones del Estado. Se llevaba un legajo particular de los funcionarios y de los ciudadanos que tenían relevancia en la sociedad. Dicho servicio estaba a cargo de un personaje –hoy fuertemente cuestionado– de apellido Musa Azar, y de un segundo de apellido D'Amico. Era un verdadero servicio de inteligencia.

Quiero aclarar que cuatro funcionarios –incluida la gobernadora– hoy están siendo denunciados e investigados por la justicia federal, precisamente por haber abordado esa tarea de inteligencia que violentaba la libertad individual y las garantías de los ciudadanos. Pero de ma-

nera especial esta tarea se hacía sobre los políticos de los distintos partidos. Se sabía la vida privada de cada uno de ellos.

Y esto no es nuevo, sino que se venía haciendo desde hace mucho tiempo en Santiago del Estero. Era una práctica conocida que ahora se puso al descubierto en virtud de la aparición de las fichas de cada uno de los funcionarios, diputados, senadores nacionales y de toda la línea de los partidos políticos.

La institución policial —al servicio del gobierno— estaba en crisis, y era un mecanismo de presión y de extorsión. Incluso obligaba a ciudadanos a prestar declaración de manera coercitiva. Estos hechos han sido denunciados en el informe presentado por el Ministerio de Justicia hace más de seis meses.

El Poder Judicial también era complaciente y se ponía al servicio de este régimen político de oprobio. Y digo esto por experiencia directa, ya que en reiteradas oportunidades me tocó recibir —a pedido de la Asociación de Magistrados— a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de turno de Santiago del Estero a partir del doble crimen de La Dársena.

A partir de ese hecho se comenzaron a conmover los cimientos de un modelo político gravemente deteriorado en el plano institucional. El crimen de esas dos chicas fue el que desató o dinamitó un sistema institucional en decadencia terminal basado en la violencia y la limitación de las garantías individuales.

Me vinieron a ver el presidente del Superior Tribunal —el doctor Cozamel—, el procurador general y demás integrantes. Realmente, en un primer momento me parecieron gente seria. Al poco tiempo la presión del gobierno hizo que renunciaran dichos funcionarios.

Luego me vino a ver otra representación de dicho Superior Tribunal, de la que participaba una jueza cuyo nombre ahora no recuerdo y que pasó a ser su presidenta. Creo que duró una semana, como duran los funcionarios en Santiago del Estero. Creo que ha habido más de cuarenta y ocho o cincuenta designaciones. Pienso que esto lo van a precisar de manera mucho más correcta y clara los senadores por Santiago del Estero.

Pero yo puedo decir sin temor a equivocarme que no hay gobierno: que hay un ejercicio discrecional del poder; que no hay diálogo

institucional; que la Legislatura tiene más de doce legisladores que están procesados en la causa ANSES; que no se han dado de ninguna manera los desafueros solicitados por los magistrados. En fin; creo que está afectado el funcionamiento de los tres poderes del Estado. Considero que las causales que fija la Constitución en su artículo 6º están largamente comprobadas.

Asimismo, entiendo que ha habido —y esto quiero destacarlo y resaltarlo— una paciencia muy grande del Poder Ejecutivo nacional que conoce y comprende la magnitud, la importancia y la significación que tiene intervenir una provincia. Por eso, el gobierno federal esperó quizá más de lo tolerable; esperó que la propia provincia de Santiago del Estero, a través de sus instituciones, resolviera esta crisis de gobernabilidad, que se llevó puesto al vicegobernador de la señora Aragonés de Juárez, al que hicieron renunciar casi coercitivamente.

No hay reemplazo institucional de quien hoy está a cargo del Poder Ejecutivo. No hubo respuesta de la Legislatura en la búsqueda de la solución institucional que impidiera la intervención. Tuvieron todo el tiempo, pero como funciona un sistema basado en el miedo, en el temor, hace muy pocos días —no creo que haga más de un mes— vinieron los legisladores a pedir que se continuara con el gobierno de la señora Aragonés de Juárez cuando todo se caía a pedazos; cuando la situación era grave; cuando no había respuesta de la Justicia en el esclarecimiento de crímenes irresueltos; cuando la sociedad estaba conmovida por el doble crimen de las chicas, en el cual se menciona incluso a hombres que están cerca del poder o ligados a él. Hay que terminar con las sospechas y aclarar las cosas.

Además, hubo acciones que denuncias públicas indican que fueron impulsadas desde el propio gobierno, como la irrupción en la vivienda de un diputado nacional al que le destruyeron la casa. ¡Y menos mal que no lo encontraron —estaba escondido en un placard—; no sé qué hubiera pasado!

Creo que hay situaciones graves que está viviendo la comunidad de Santiago del Estero. Considero que esta noche el Senado tiene que actuar de la misma manera en que lo hizo la Cámara de Diputados. No se puede perder tiempo, porque si hoy no actuamos con la responsa-

bilidad institucional y cívica que el hecho nos demanda, procediendo a intervenir la provincia de Santiago del Estero, y llega a producirse una muerte o alguna situación grave, será algo que se va a trasladar al Senado por la demora.

Por eso, creo que están fundadas las razones. Así lo indica el informe del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y la labor realizada por los funcionarios intervinientes —el doctor Duhalde, el doctor Lanusse—, que recogieron testimonios de organizaciones de derechos humanos que muestran la inexistencia de justicia. La falta del estado de derecho en Santiago del Estero, la carencia de las garantías individuales en esa provincia y el riesgo de que pueda ocurrir algo mucho peor, como la muerte de algún representante institucional o de más inocentes, nos obligan a intervenir hoy esa provincia.

Por lo tanto, quiero concluir mi exposición destacando que vamos a apoyar firmemente la intervención federal aprobada por la Cámara de Diputados. Espero que todos los bloques del Senado hagan lo mismo y aprueben por unanimidad esta importante y trascendente decisión.

También esperamos que esta intervención breve, de ciento ochenta días, permita normalizar la provincia. Deseamos que administre bien los recursos de los santiagueños, que sea ordenada y que prepare la salida institucional electoral en el corto plazo, para que el pueblo de Santiago del Estero pueda elegir libremente en las urnas a su nuevo gobierno provincial.

Por todos los fundamentos expuestos, vamos a votar afirmativamente la intervención federal propuesta.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Zavalia.

Se encuentran también anotados para exponer los señores senadores Gómez Díez, Morales y Prades.

Sr. Zavalia. — Señor presidente: soy senador por la provincia de Santiago del Estero y, tal vez, muchos de los presentes no me conozcan, pero me ha tocado ser protagonista de gran parte de estos últimos veinte años de democracia en mi provincia, sobre todo de los últimos quince o dieciséis.

Realmente hoy veo que el tiempo me ha dado la razón. Pero esa razón la recibo con mucha

tristeza y amargura, porque en ese proceso en el que viví los mejores años de mi juventud, si bien tuve alegrías también sufrí grandes dolores y frustraciones.

En tal sentido, recuerdo que en 1991 gané la elección de la provincia de Santiago del Estero, pero lamentablemente un fraude electoral y una ley perversa e inconstitucional que ha prostituido la política argentina en muchas de nuestras provincias —como es la Ley de Lemas— me quitaron la posibilidad de ser gobernador. Así nació un gobierno ilegítimo e ilegal, surgido de un proceso fraudulento y espurio, aun cuando existieran dos corrientes dentro de un justicialismo que se encontraba dividido en esa provincia.

Ese proceso, obviamente, fue insostenible en el tiempo. No aguantó su ilegitimidad y derivó en una intervención federal, que trajo como correlato uno de los hechos más tristes de estos veinte años de democracia. Es decir, no solamente desembocó en la designación de un interventor sino que se quemaron los tres poderes: el Ejecutivo —la Casa de Gobierno—, el Judicial —los tribunales provinciales— y el Legislativo —la Legislatura. Amén de eso, se saquearon y se quemaron varios domicilios particulares, entre ellos el del ex gobernador Iturre —ya fallecido— y el de Carlos Juárez, para mencionar algunos de ellos, lo que dejó la sospecha, más allá de la ilegitimidad de este gobierno, fruto del fraude y de la Ley de Lemas, de que habían actuado otros elementos o factores que obviamente veían a Santiago del Estero como una posibilidad más de poder tomar esa provincia para su usufructo personal o sectorial. Es decir, que hubo algunos sectores del poder central que avalaron este atropello hacia estas instituciones.

Fue Schiaretti el hombre puesto por el presidente de la Nación de ese entonces para hacerse cargo de la intervención de la provincia de Santiago del Estero. Pero no bien empezó a funcionar este interventor, quien habla —junto con otra gente más que me acompañaba— se fue dando cuenta de que este interventor venía nada más y nada menos que a manipular políticamente a la provincia de Santiago del Estero. Con el tiempo esto quedó plasmado en el proceso electoral de 1995 cuando Schiaretti, actual vicegobernador de la provincia de Córdoba, quiso imponernos como gobernador de la provincia a

un candidato que le respondía al aparato político electoral, al prebendismo y al servilismo que detentaba Schiaretto desde el gobierno provincial. Pero perdió esas elecciones; no logró que Santiago del Estero se convirtiera en una sucursal de la hermana provincia de Córdoba. Y entonces nuevamente surgió el doctor Juárez elegido como gobernador.

Por cierto que Schiaretto fue nuevamente a destruir a la Unión Cívica Radical —y desde luego a quien la representaba en ese entonces, es decir, quien habla— y al mismo tiempo a purificar al justicialismo, que había quedado muy mal después de ese proceso electoral fraudulento. Y si bien los dos sectores integrantes de ese partido estaban muy enemistados —incluso hoy existe la hipótesis de que la muerte del ex gobernador Iturre podría haberse debido no a una enfermedad cardíaca sino a una inyección letal—, la ambición de poder, que estaba por encima de las diferencias personales y políticas, hizo que en Santiago del Estero termináramos con Juárez nuevamente en el gobierno de la provincia.

Decía al principio que hablo con mucho dolor y tristeza, porque nuevamente estamos ante un gobierno nacional justicialista, ante una gobernadora justicialista, que aprobada esta ley de intervención obviamente dejará de serlo. Los argentinos tenemos que mirar para adelante. No quiero hacer leña del árbol caído, porque como bien lo expresó el presidente de la banca justicialista —muchas de las cosas que ha dicho las he vivido en carne propia—, se cumplen los artículos 5º y 6º de la Constitución Nacional.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo Guimle.

Sr. Zavalía. — Nosotros vamos a apoyar esta intervención a los tres poderes de la provincia de Santiago del Estero, pero no es que sea de nuestro agrado; por el contrario nos sentimos avergonzados; sentimos vergüenza ajena. Pero desde luego estamos sobre circunstancias que nos han sobrepasado, la falta de división de los poderes, la ausencia de administración de justicia y tantos otros avasallamientos más que se han cometido en la provincia.

En agosto —hace casi ocho meses— presenté un proyecto de intervención al Poder Judicial de la provincia, porque consideraba que las cir-

cunstancias ya en ese entonces estaban dadas para que se procediera de ese modo, como consecuencia de este horrendo crimen, del doble crimen de estas dos chicas en La Dársena, en el departamento de La Banda, que después generó todo lo que dijo el señor senador Pichetto sobre violación de los derechos humanos.

Quien habla tiene tres fojas de la V-2 —que todavía no las tengo en mis manos—, acerca de las persecuciones que he sufrido en carne propia, de las amenazas, de la posibilidad de secuestro de un hijo mío. Es decir que toda esta historia la he vivido en carne propia.

Lo cierto es que yo presenté en agosto este proyecto de intervención. Y si bien este cuerpo no era Cámara de origen, ya en la Cámara de Diputados de la Nación había otros proyectos presentados por otros partidos políticos en igual sentido, de intervención al Poder Judicial.

Y digo que el proyecto era sensato y lógico, porque si nosotros lográbamos intervenir el Poder Judicial, neutralizábamos a los otros dos poderes y, fundamentalmente, al Poder Ejecutivo provincial en sus abusos de poder. Y tal vez hoy no tendríamos que estar hablando de una intervención a la provincia de Santiago del Estero. Quizá hubiéramos logrado evitar lo que hoy se conoce en el país, no solamente en Santiago del Estero. Pero no se nos escuchó y hemos llegado a este punto extremo, de una gran gravedad institucional, de tener que intervenir a nuestra provincia, nuevamente en un plazo de nueve o diez años, un mismo partido, tanto a nivel nacional, con un mismo gobierno del mismo signo político.

Entonces, apoyo el proyecto, pero sinceramente creo que debemos hacer esto con una gran responsabilidad, porque ello es un pésimo ejemplo para la República; no solamente para Santiago del Estero sino para todos los estados provinciales.

Y ojalá que el representante que designe nuestro presidente de la Nación en su nombre, quien tendrá la representación de nuestro presidente como interventor federal, sea una persona que no repita la historia de Schiaretto, que no vaya a intentar manipular la opinión del pueblo de Santiago del Estero, porque la gente no lo va a permitir. Hay un pueblo movilizado, hay un pueblo que va a estar muy atento a los pasos que dé ese interventor federal. Sea quien fuere

la persona que designe el señor presidente, nosotros lo vamos a recibir de la mejor manera posible, pero no vamos a permitir ninguna manipulación política, porque este pueblo va a continuar movilizándose.

No le cierre el ojo, señor senador, no sé a qué colega. Estoy hablando muy en serio. No le vaya a tocar, de pronto, a su provincia, una intervención.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Guinle). — Continúe en el uso de la palabra, señor senador.

Sr. Zavalía. — Entonces, lo vamos a hacer, pero queremos que ese interventor designado no haga lo de Schiaretti, que no bien llegó a Santiago del Estero se rodeó de los vivos de siempre.

Hay que decir una cosa que es real y cierta. En nuestra provincia, como en otras tantas, hay una estructura corrupta e inmoral, que no se agota solamente en el prebendismo político, en el servilismo o en el autoritarismo político, o en muchas otras cosas más.

Contra esa estructura corrupta, que no nace de la noche a la mañana sino que está enquistada en cada pueblo, en cada lugar de nuestra provincia, tuve que luchar y lo sigo haciendo, como lo llevan a cabo muchos de ustedes, en sus respectivas provincias, contra los abusos del poder, contra las violaciones permanentes de nuestras leyes y de nuestra Constitución, contra el protectorado que ejercen estos políticos feudales que tenemos en cada pueblo y en cada provincia de la República Argentina. A ello se suman la hipocresía y el caradurismo de políticos de distintos partidos, incluso del mío propio, que hasta ayer aplaudían y alababan a Carlos Arturo Juárez.

Claro. Hoy está caído. Entonces, es fácil hacer leña del árbol caído. Pero yo no me voy a basar en ese discurso mezquino, hipócrita y falso. No voy a hacer leña del árbol caído. Todos sabemos lo que pasa en Santiago del Estero, como en muchas provincias argentinas más.

Pero no nos equivoquemos, ese interventor que designará nuestro presidente tendrá una gran tarea, que es recomponer moralmente a nuestra provincia de Santiago del Estero, recuperar la política con mayúscula, darnos una organiza-

ción constitucional que respete verdaderamente los principios, derechos y garantías consagrados en nuestra Carta Magna, terminar con los anacronismos de la política y modernizar la política de nuestra provincia, pero también respetar nuestros recursos humanos. De tal manera que cuando lleguemos al proceso electoral, cada uno de nosotros pueda asistir a un proceso que nos permita recuperar nuestra identidad como provincia, como santiagueños, para que nunca más podamos sentirnos mancillados como hoy.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Gómez Díez.

Sr. Gómez Díez. — Señor presidente: desde nuestro espacio político hemos venido reclamando con insistencia la intervención federal a los tres poderes del Estado en la provincia de Santiago del Estero. Incluso, en el curso de estos meses, representantes de diversos sectores políticos junto a representantes de la cultura, como es el caso de Marcos Aguinis, Francisco Delich o del filósofo Guillermo Masi, hemos firmado una declaración que ha sido reproducida por los medios de comunicación social pidiendo la intervención federal a esta provincia.

Ésa declaración en su párrafo sustancial decía textualmente: "Los abajo firmantes, ciudadanos argentinos que expresamos distintas corrientes de pensamiento político y social, exigimos al señor presidente de la República, Néstor Kirchner, una inmediata intervención en el marco de nuestra Constitución para dar fin a la total y absoluta cancelación de las garantías de los ciudadanos y la ausencia de estado de derecho en la provincia de Santiago del Estero. Es necesario que el partido del gobierno dé lugar al tratamiento parlamentario y utilice los instrumentos constitucionales para garantizar las libertades públicas del pueblo de Santiago del Estero. Este régimen despótico está, además, hoy investigado por el asesinato de ciudadanos, malversación de fondos, usos de recursos públicos, cobro indebido de jubilaciones y cien causas más. ¿Qué más debe suceder para que el gobierno se decida a actuar?"

El ministro del Interior nos contestó que no estaban dadas las causales para intervenir la provincia de Santiago del Estero. Nos dijo textualmente que para que hubiera una intervención tenía que haber un hecho objetivo. Y, hasta

ahora, ninguno de los hechos que me pueden, o no, desagradar son objetivos y demuestran que está en compromiso la vida republicana de la provincia; se tiene que contar con hechos contundentes.

A escasos días de estas afirmaciones ingresa a este Congreso el proyecto de ley que estamos considerando, lo cual demuestra cuán alejada de la realidad estaban esas expresiones que realizaba el señor ministro del Interior.

El artículo 1º de la Constitución establece con claridad que la Nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana; el artículo 5º establece que se garantiza a las provincias el goce de sus instituciones en cuanto respeten la forma republicana de gobierno y garanticen la administración de justicia; y el artículo 6º autoriza al gobierno federal a intervenir las provincias cuando las mismas no garantizan la forma republicana de gobierno. En Santiago del Estero se encuentra subvertida, y desde hace largo tiempo, esta forma republicana de gobierno que la Constitución consagra.

Allí la democracia es sólo una forma sin sustancia, sin contenido y sin efectividad práctica: gobierna una familia o quien ésta designe. Y el gobierno de Carlos Díaz, que duró menos de seis meses, es un claro ejemplo de esta situación. Es una familia en la cual marido y mujer se turnan además en el ejercicio del poder. No existe separación de poderes como manda la Constitución; Carlos Juárez ha publicado en los diarios nacionales solicitudes en su doble e insólito carácter de asesor de los poderes Ejecutivo y Legislativo de su provincia. No hay justicia, hay impunidad para quienes delinquen protegidos por el poder político. Más aún, y esto es extremadamente grave y descriptivo de la situación que se vive en esa provincia: el propio mensaje remitido por el Poder Ejecutivo nacional reconoce que en Santiago del Estero la justicia es un instrumento de persecución de los opositores políticos.

Hace tiempo que la República se esfumó en la provincia de Santiago del Estero y es necesario restablecerla. Ese es un deber de este Congreso y del gobierno federal.

Sí tenemos que particularizar, con absoluta sinceridad, que a nuestro criterio el proyecto que ha remitido el Poder Ejecutivo nacional no apunta al corazón de la estructura del poder juarista,

con lo cual se corre el riesgo de que nos quedemos en los efectos sin ir a las causas, porque para democratizar la provincia de Santiago del Estero es necesario modificar la Constitución del juarismo, fundamentalmente en lo que hace al sistema electoral que esa Constitución contiene. Se trata de un sistema electoral absolutamente perverso que ha posibilitado el modelo de acumulación de poder de los Juárez.

La Legislatura santiagueña se integra con cincuenta representantes. Los mismos se renuevan en dos turnos: de veintiocho y de veintidós legisladores. Cuando se eligen veintidós se considera a la provincia como un distrito único. La fuerza política que obtuvo mayor número de votos se lleva los dos tercios de la representación legislativa, mientras el tercio restante se reparte por el sistema proporcional.

En el turno en el cual se renuevan veintiocho legisladores, la provincia se divide en seis circunscripciones electorales. En cinco de ellas, la fuerza política que obtuvo mayor número de votos se lleva el setenta y cinco por ciento de la representación legislativa, mientras la segunda fuerza en número de votos se lleva el veinticinco por ciento.

Esta combinación de sesenta y seis por ciento de la representación legislativa en un turno de renovación, es decir, los dos tercios, unido en el turno restante, en el setenta y cinco por ciento de la representación, configura un sistema que es el que le garantizó al juarismo, a lo largo de los años y del tiempo, el control del setenta por ciento de la Legislatura provincial, cualquiera hubiera sido el resultado electoral.

De esta forma, se licuó la pluralidad política en la provincia de Santiago del Estero y se instauró un régimen absoluto. Porque hay que comprender que la democracia es un sistema de gobierno que está pensado de manera tal que ningún sector político tenga por sí solo el control de los dos tercios del órgano legislativo. ¿Por qué? Porque con los dos tercios de la Legislatura, como los dos tercios del Congreso en el orden federal, se adoptan las decisiones más graves que se pueden tomar en la vida democrática. Con los dos tercios de la Legislatura se remueve a los integrantes del Poder Judicial y a los miembros de los órganos de control.

Es esta llave, es esta dominación, es este sistema electoral artificioso, lo que permitió mon-

tar esta maquinaria de poder que doblegó a la Justicia en Santiago del Estero. Y es esto lo que hay que cambiar. No basta con una intervención: hay que cambiar el sistema de poder, hay que cambiar la Constitución. Esta es la democratización de fondo que hay que hacer en Santiago del Estero.

Por eso es que nosotros hemos presentado hoy un proyecto de ley que tiende a ser la expresión de estas circunstancias sobre las cuales creemos que es necesario actuar. En realidad, 365 días es un tiempo insuficiente, porque acá hay que encomendarle al interventor federal que convoque al pueblo de Santiago del Estero a una Convención Constituyente para cambiar la Constitución del juarismo.

Por eso nosotros creemos que esta intervención federal debería ser por un mínimo de 365 días, prorrogable por 180 días más. Y que en ese transcurso se modifique el sistema electoral de los santiagueños. Esa es la forma real y auténtica de cambiar el molde autoritario que hoy existe en la provincia de Santiago del Estero.

Detrás de una estructura de poder feudal y autoritaria, siempre hay un sistema electoral hegemónico. Porque esa estructura feudal y autoritaria se sirve de la democracia sólo como un ropaje. Por eso es muy importante, cuando uno analiza estas situaciones de feudalismo político, ver cómo funcionan las instituciones y esta llave de acceso al poder que es el sistema electoral.

Por eso, nosotros vamos a votar favorablemente la intervención federal a esta provincia, como un gesto de solidaridad con el pueblo santiagueño. Pero queremos ser claros: la intervención federal no alcanza si no se va a las causas que posibilitaron este esquema perverso de poder que hoy estalla en la provincia de Santiago del Estero.

En esta noche en que nos toca hablar de esta provincia querida de nuestro Norte —y la nombro así, porque es una de las provincias históricas del norte al cual yo también represento en este Senado— quiero terminar mi alocución rindiéndole homenaje a monseñor Gerardo Sueldo. Estuve con él en mi provincia, en Salta, la noche en que viajó a Santiago del Estero; es decir, la noche en que él falleció en un trágico episodio nunca aclarado. El fue un pastor que luchó por su pueblo y, sobre todo, luchó por la dignidad de Santiago del Estero.

¡Ojalá que esta intervención federal sirva para establecer la democracia en esa provincia! Desde nuestro humilde punto de vista creemos que una gestión de un interventor federal no alcanza para reparar la situación que se vive en esta provincia, si no efectuamos un cambio de fondo. Esto requiere modificar la Constitución autoritaria del juarismo y para eso hay que modificar el sistema electoral, a fin de gestar uno que realmente garantice la pluralidad política y la expresión genuina del pueblo de Santiago del Estero.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: quiero ratificar las expresiones del señor senador Zavala, que lógicamente es más conocedor que todos nosotros de las situaciones que, por otra parte, él viene denunciando hace bastante tiempo.

No digo que resulten extrañas porque, como él planteaba, estas situaciones también ocurren en otras provincias, pero el relato de hechos planteados permanentemente en nuestro bloque a veces resulta increíble.

Por eso es que no sólo ratificamos todo lo que acá se ha planteado, sino que también coincidimos en términos generales con la exposición que ha hecho el presidente del bloque Justicialista en punto a apoyar en general el proyecto de intervención que ha tenido sanción en la Cámara de Diputados.

Ratificamos que esto se haga en el marco del artículo 6º de la Constitución Nacional, sin perjuicio de dejar en claro que también debe hacerse en forma concordante con el artículo 14 de la Constitución de la provincia de Santiago del Estero, que plantea expresamente cuál es el procedimiento de los actos de intervención federal. Concretamente, la redacción de la Constitución provincial plantea que, en caso de intervención del gobierno federal, los actos que su representante practique deberán ser exclusivamente administrativos y serán válidos para la provincia si hubieran sido realizados de acuerdo con lo previsto en dicha Constitución y en las leyes provinciales. También se establece allí una reglamentación acerca de cuáles son los límites a los que, de acuerdo con la Constitución provincial, está sometida cualquier tipo de intervención.

Entonces, en virtud de lo establecido por los artículos 6º de la Constitución Nacional y 14 de

la Constitución provincial, el bloque del radicalismo va a apoyar en general el proyecto de intervención.

Antes de plantear cuál va a ser nuestra posición en cuanto al tratamiento en particular de este proyecto, voy a hacer un breve relato de algunas situaciones que nos han llevado desde hace mucho tiempo a plantear la intervención. En ese sentido, digo que nuestro bloque de diputados presentó en alguna oportunidad —y también lo ha hecho el señor senador Zavalia— proyectos de intervención al Poder Judicial y a la provincia que hasta este momento no fueron tenidos en cuenta por el Poder Ejecutivo nacional que hasta hace pocos días, según expresiones del propio ministro del Interior, sostenía que todavía no estaban dados los recaudos mínimos exigidos para adoptar una medida de fondo y tan extrema como es la intervención. Hubiera sido bueno contar hoy con la presencia del señor ministro del Interior para que nos explicara cuáles han sido los cambios que se produjeron en la provincia de un día para el otro.

Nosotros ratificamos la posición que tuvimos siempre —sobre todo durante los últimos meses— con relación a la necesidad de producir una intervención sobre la base de muchos antecedentes; algunos de ellos ya han sido mencionados por el presidente del bloque Justicialista, como es el caso de la responsabilidad en el saqueo e incendio en la vivienda del diputado José Oscar Figueroa. En ese caso en particular nos ha preocupado el testimonio de un ex policía de la provincia, quien a través de los medios de comunicación aseguró que fue la gobernadora quien dio la orden de saquear e incendiar la vivienda de José Oscar Figueroa, con el agregado de que el objetivo era terminar con su vida. Son expresiones que han surgido de actores de la vida cotidiana de Santiago del Estero que llaman la atención y que se inscriben dentro del marco de la situación que hoy estamos tratando.

También merece mencionarse el caso de la percepción indebida de haberes jubilatorios, que no sólo ha motivado la iniciación de acciones judiciales sino también el pedido de desafuero de la actual gobernadora y de legisladores provinciales. Por otro lado, debemos mencionar las amenazas contra funcionarios nacionales, como lo sucedido con Elías Baracat: acusaciones por

mal desempeño en sus funciones y actos de discriminación, todo lo cual tiene que ver con algo que aquí se ha planteado por cuanto todos estos hechos no son aislados, sino que se inscriben en el marco del concepto de gobierno feudal, hegemónico y totalitario que, inclusive, llegó al extremo de modificar la Constitución provincial para cambiar el sistema electoral con el objeto de contar con mayor representación y, así, con la totalidad del poder para someter no sólo a propios sino también a extraños.

También se registraron actos de discriminación política en el otorgamiento de beneficios, previa exigencia de la afiliación política al justicialismo y al juarismo. Por otra parte, se puede citar la adopción de medidas arbitrarias contra empleados; en este sentido, se pueden citar los casos de Walter Carrera, de Herrera Corsi, de Ledesma Galván.

Vale la pena mencionar el tema de las decisiones administrativas relacionadas con postergación de ascensos y jerarquizaciones en función del pensamiento y la filiación política, teniendo en cuenta no sólo la pertenencia a otro partido político sino que perteneciendo al propio justicialismo se analizaba si eran o no juaristas. También se daba el caso de prohibiciones a funcionarios varones para recibir mujeres. Estas medidas parecen realmente insospechadas e imposibles de tomar en una administración plural. Sin embargo, estas situaciones eran conocidas y vistas por todo el pueblo de Santiago del Estero, como por ejemplo, la convocatoria inconstitucional a elecciones municipales.

De todos modos, la falta más grave es la violación de los derechos humanos. También ha sido planteada por el senador Pichetto la cuestión de que la Secretaría de Informaciones ejercía una estricta tarea de inteligencia y de recopilación de información acerca de dirigentes políticos, periodistas, religiosos y dirigentes barriales. Figuraban, lógicamente, los datos de los que pensaban diferente, entre ellos, el senador Zavalia y otros encumbrados dirigentes no sólo del radicalismo sino también del propio justicialismo y de instituciones intermedias.

Aún después del alejamiento de quien fuera su titular desde hace décadas y con pocas interrupciones —el comisario Musa Azar—, continúan generándose los más graves hechos

atentatorios contra los derechos humanos en la provincia. Todas estas situaciones se inscriben dentro de lo que nosotros denominamos un gobierno feudal.

Espero que estemos dando una señal para las otras provincias que siguen el mismo camino. Algunas utilizan las mismas metodologías, y otras siguen el camino de la reforma constitucional para lograr reelecciones o incluir sistemas de enmiendas con mayorías agravadas, sobre la base de la modificación del sistema electoral, a los efectos de asegurar la mayoría mínima de dos tercios para manejar el poder a su antojo.

cad Eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Y espero que la señal relacionada con la situación que hoy estamos definiendo en Santiago del Estero sea un verdadero llamado de atención para todos los gobiernos provinciales. Los que defendemos el federalismo consideramos que aún existen muchas deudas respecto de la unidad nacional.

Estos son los hechos que nos llevaron a apoyar esta decisión extrema. Como ya dijimos, hubiera sido beneficioso contar con la presencia del ministro del Interior para que nos aclare mejor las cosas en virtud de la premura que exige la cuestión.

C El problema fundamental no lo constituyen los hechos sino la irresponsable división en el pueblo de Santiago del Estero. Y esperamos, como dijo el senador Zavallía, que quien sea elegido no haga las cosas que hicieron los anteriores interventores y que realmente se produzca una verdadera normalización.

A pesar de que ratifico nuestro voto afirmativo en la consideración en general, en particular plantearemos algunas observaciones. La primera de ellas se relaciona con la prórroga dispuesta en el artículo 4º. No estamos de acuerdo con que la intervención sea por más de 180 días. Consideramos la posibilidad de la prórroga, siempre y cuando la decisión esté en manos del Congreso de la Nación.

La intervención tendría que ser hasta la normalización de la situación para que el pueblo de Santiago del Estero —con autonomía y sin la presencia hegemónica de quienes manejaron el poder a gusto y paladar durante 50 años— pueda resolver su futuro sin depender del Estado nacional, como maestro ciruela, para decidir qué

es lo que tiene que hacer. En consecuencia, consideramos que el plazo de la intervención tiene que ser de 180 días prorrogable por un lapso similar, siempre y cuando sea aprobado por el Congreso Nacional.

Además, propondremos el agregado de un artículo referido al tema del control, pues se trata de una falla en que incurrió la intervención anterior. Propondremos que el control esté a cargo de la Auditoría General de la Nación, que a su vez será supervisada por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, de manera tal que quienes vayan en delegación del Estado nacional a la intervención cuenten con el control estricto de la auditoría, que está haciendo las cosas bien en esa materia.

Estos van a ser los dos planteos, señor presidente, en el tratamiento en particular: esta modificación al artículo 4º y el agregado de un artículo 6º que postule la situación del control que acabamos de describir. Por lo demás, señor presidente, comparto todos los conceptos que acá se han vertido.

Reiteramos la esperanza de que ésta sea una buena señal para evitar las hegemonías y para que, en verdad, podamos afianzar una democracia sólida y plural en todo el territorio nacional.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. — Señor presidente: voy a adelantar el voto favorable a la intervención a la provincia de Santiago del Estero, apoyando la sanción remitida por la Cámara de Diputados.

Creo que en este recinto, tal cual lo que hemos escuchado hasta el momento, existe una coincidencia acerca de la necesidad de la intervención, del remedio federal, considerando lo que fija el artículo 5º de la Constitución Nacional. Es decir, la interpretación de que la forma republicana ha sido corrompida, de que se ha alterado el equilibrio de los poderes. Esto ya por sí mismo amerita la aplicación del remedio federal.

Incluso el miembro informante ha reconocido que esta medida quizás debió llegar antes y que probablemente eso hubiera posibilitado otro tipo de tratamiento. Se mencionaron proyectos de hace bastante tiempo que planteaban la intervención al Poder Judicial.

Luego de constituirse en la provincia y de entrevistarse con ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, magistrados y funcionarios, en septiembre de 2003, el Ministerio de Justicia de la Nación produjo el informe a través del secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios, el doctor Pablo Lanusse, y del secretario de Derechos Humanos, el doctor Eduardo Luis Duhalde. Basta recorrer las páginas...

—Murmillos en el recinto.

Sr. Giustiniani. — Perdon por el nombre. Me corrigen el nombre. Duhalde: todos sabemos que es el secretario de Justicia.

Sra. Fernández de Kirchner. — No; es el secretario de Derechos Humanos.

Sr. Giustiniani. — Entonces, ese informe de por sí ha sido lapidario. Allí se manifestaban las denuncias por la grave violación a los derechos humanos, las persecuciones, el sistema policia-co y la falta de independencia de la Justicia.

Que el asesinato de los jóvenes Nazar y Villalba, conocido como “el doble crimen de La Dársena”, haya puesto este tema en el tapete nacional no desvirtúa el hecho de que ninguno de nosotros desconocía que todo este tipo de situaciones se estaban produciendo.

Yo comparto también lo dicho por muchos senadores preopinantes en el sentido de que este llamado sistema feudal evidentemente es un tema preocupante que se repite con características similares en muchos otros lugares del país. Todos sabemos que esa demorada reforma política —tal como se la llama— es una deuda pendiente de la democracia argentina y que desde el Congreso de la Nación se debe profundizar en este debate, concretando la sanción de leyes y medidas que mejoren la calidad institucional de nuestro país.

Hoy se habló de la ley de lemas y con toda precisión se señaló que se trata de un sistema para muchos inconstitucional. Nosotros también la padecemos. Es decir, se han expresado cosas muy graves y muy serias. Por eso, apoyamos la intervención a los tres poderes.

También quiero destacar que el señor senador por Salta ha efectuado una reflexión hacia adelante, que me parece pertinente. O sea, que se trata de la decimocuarta intervención federal a la provincia de Santiago del Estero. Evidentemente, existen causas profundas para que

se hayan producido tantas intervenciones. Y la última ha sido relatada con toda precisión por el señor senador por Santiago del Estero, dado que él ha sido un activo protagonista de la vida política. De estas circunstancias debemos extraer las enseñanzas necesarias para que no vuelva a ocurrir exactamente lo mismo y estemos en un tiempo discutiendo una nueva intervención.

Debemos plantear muy firmemente la necesidad de una reforma constitucional que posibilite los mecanismos de participación ciudadana, para que el sistema político de la provincia de Santiago del Estero esté acorde a una verdadera democracia.

Debemos plantear una reforma del sistema judicial para que la depuración de la Justicia sea el otro elemento fundamental, a través de un Consejo de la Magistratura que garantice un proceso de selección de los jueces con independencia del poder político.

Y debemos garantizar también el desmantelamiento de un sistema de política clientelista —detallado en el informe del Ministerio de Justicia— como el que sabemos que funciona en muchas provincias argentinas, en las que el Estado tiene un papel muy fuerte en materia de empleo. En ese sentido, el empleo público es prácticamente el único que se tiene a mano, porque el sistema productivo y las economías regionales se han visto destruidas en las últimas décadas. Entonces, como bien se dijo muchas veces, se utiliza el empleo público como una coacción para la afiliación partidaria.

Por todas las razones expuestas, creemos que esta noche debemos dar una respuesta concreta con respecto a esta situación. Por ese motivo, adelantamos nuestro voto favorable a la intervención federal.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero solicitar el cierre de la lista de oradores, una inserción y recurrir a la comprensión de los señores senadores para que se lleve a cabo un uso racional del tiempo. Tengo la preocupación de que podemos llegar a pasar un papelón histórico si se siguen retirando del recinto señores senadores. Así que pido que avancemos con la mayor rapidez posible en este debate y que se cierre la lista de oradores.

Sr. Urquía. – Señor presidente: pido que se me incluya en esa lista.

Sr. Presidente (Guinle). – Cómo no.

Si hay asentimiento, vamos a proceder a cerrar la lista de oradores.

–Asentimiento.

Sr. Presidente (Guinle). – Voy a leer la lista de oradores. Se encuentran anotados para exponer los señores senadores Rossi, Massoni, Mera, Castro, Negre de Alonso, Prades, Yoma, Castillo, Giri, Ibarra, Urquía, Fernández de Kirchner, Losada y Pichetto...

Sra. Colombo. – Pido que me anote, señor presidente.

Sr. Presidente. – Después del senador Urquía. Queda cerrada la lista de oradores.

Tiene la palabra el señor senador Rossi.

Sr. Rossi. – Señor presidente: voy a votar favorablemente la ley por la que se dispone la intervención a la provincia de Santiago del Estero.

Me resulta muy triste tener que votar la intervención a una provincia, pero lo hago en el marco de la solidaridad para con el pueblo santiagueño.

Comparto los términos que expresara el señor presidente del bloque de la mayoría: que todas las evidencias que se han detectado e incorporado en el tratamiento de este proyecto dejan a las claras que en Santiago del Estero no sólo no funcionaba la división de poderes sino que había un mecanismo instrumentado para hacer imposible el funcionamiento constitucional de los derechos de sus habitantes.

En este sentido, creo que todos los argentinos hemos venido siguiendo ininterrumpidamente los capítulos de movilización del pueblo santiagueño. Esto ocurrió a partir de un cansancio institucional por la falta de funcionamiento del Poder Judicial y, lo que es más triste, a partir del asesinato de jóvenes en esa querida provincia.

Fue precisamente la muerte de esas dos jóvenes lo que se constituyó en la gota de agua que rebasó la tolerancia y la paciencia de los santiagueños, que ganaron la calle, se movilizaron y expresaron, lo cual lentamente empezó a marcar un mecanismo de fuerte protagonismo.

Hoy, cuando tomamos conocimiento de la forma en que se conducía el poder político, de la forma en que se utilizaban las instituciones

democráticas para servirse a sí mismo, y a partir de ahí implementar una maquinaria de impedir el ejercicio de los derechos de sus habitantes, uno se da cuenta de la importancia de la decisión del Poder Ejecutivo nacional de remitir este proyecto de ley, que tiene sanción de la Cámara de Diputados y seguramente tendrá la aprobación de este Senado.

La intervención es por ciento ochenta días. Es un gran desafío para la persona que tenga a su cargo el ejercicio de la intervención. Si bien es cierto que tiene un plazo adicional de otros ciento ochenta días, tendrá que saber que el pueblo de Santiago del Estero esperará ansioso los primeros resultados de esa gestión para que empiece a vislumbrar un horizonte de democracia, de juego institucional, y que realmente Santiago del Estero quede como que ha vivido una experiencia nefasta desde el punto de vista político pero que empieza a estar en los cauces institucionales.

Si esto lo logra el futuro interventor, esta sanción que estamos dando para que se convierta en ley el proyecto y, por ende, válida la intervención, estaría realmente en el camino del acierto.

Adelanto el voto afirmativo de nuestra bancada y hago votos para que el pueblo de Santiago del Estero viva plenamente el juego de las instituciones a partir del proceso democrático que se abrirá como una de las responsabilidades que tiene el interventor. Y quiero como vecinalista hacer hincapié también en que las ciudades que en este momento están siendo gobernadas por intendentes democráticamente elegidos, lo seguirán siendo, porque esta intervención no las alcanza, sino que, en virtud de la voluntad que tuvieron los habitantes de Santiago del Estero para elegir a cada uno de sus intendentes, ellos continuarán, por supuesto, ejerciendo su mandato, toda vez que la intervención alcanza al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y, en comisión, al Poder Judicial.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Massoni.

Sr. Massoni. – Tengo el honor de hablar ante la última estructura federal que queda en el país. Me complace, fundamentalmente, que todos reconozcan que hay pruebas suficientes. Hay dos teorías sobre la intervención, si es un tema político o judicial. Si no hay pruebas, es judicial, y aquí hay pruebas.

No es de ahora lo que ocurre en esta provincia y no es de ahora lo que ocurre en otras provincias; cuatro o cinco provincias de la República Argentina son dueñas del 80 por ciento del producto bruto interno. Tiene que ser claro esto: se trata de cuatro o cinco provincias; el resto se distribuye el 20 por ciento del producto bruto interno.

No es de ahora lo que ocurre en Santiago del Estero. En 1919 se plantea la primera intervención federal; en 1924 ocurre una nueva intervención; en 1928 nuevamente se interviene; en 1929 nuevamente ocurre ese hecho; en 1948 asume de interventor Ramón Subisa, seguido posteriormente por el doctor Almerindo Dibernardo; en 1955 es intervenido, designándose interventor federal a José Armando Caro; en 1962 el interventor nuevamente es representante del Estado federal para combatir los problemas supuestamente políticos del sistema; en 1962 el comodoro Agustín Héctor de la Vega resulta ser nuevamente interventor; se repite en 1973, continúa en 1993 y llegamos a lo que es hoy. Algo ocurre y no es una cuestión política solamente, no es cuestión de hombres; porque ésta es la provincia que tiene el menor producto bruto interno per cápita del país y no alcanza ni al 12 por ciento del producto bruto interno per cápita de la Capital Federal.

Yo no sé si en ciento ochenta días se puede modificar una situación como ésta. Creo que estamos frente a un proceso económico, financiero y social que no va a encontrar salida mientras no ocurran modificaciones financieras y sociales que hasta ahora son negadas.

El resto del país observa, muchas veces extrañado, lo que ocurre en el interior, en estos estados federales. Este es otro mundo y el producto bruto interno de esta Capital Federal —y lo digo con todo respeto— es el resultado de lo que no logran las provincias federales.

Los pueblos y las provincias del Norte Argentino respondían a concepciones totalmente distintas de las que hoy están imperando en la cultura nacional. No se puede negar que eran pueblos cultos, que participaron, de una u otra manera, del resguardo del sistema federal.

Por todo ello, particularmente comparto la necesidad de la intervención. Pero, por favor, no pensemos que las palabras que aquí vertimos tienen una trascendencia mayor en lo que

está ocurriendo. Mi deseo es que se comprenda que los hechos son producto de determinados hombres y de determinados grupos. Tiene que ser claro que esos hombres autores de hechos no pueden participar más en políticas de dirección o de control.

Es lógico que se haya esperado para la intervención hasta que las pruebas sean ciertas. Y, hoy, son ciertas. Hubo denuncias. Pero, hoy, son ciertas. El objetivo de la intervención es superar los hechos que están ocurriendo. Si ello no sucede es que no ha habido causal de intervención en estos momentos. Tiene que ser claro. Si vuelve a repetirse, el fracaso es nuestro, del Senado. El último ámbito federal se habrá convocado. Comparto el criterio de controles económico-financieros, de participación con gente competente en el tema y una acción en el resto del país que haga lugar a los estados federales realmente sumergidos.

Comparto totalmente el criterio del proyecto de ley, al que adicionaría algunas consideraciones que ha hecho un miembro de este bloque, en cuanto a que se efectivicen, también, controles por organismos nacionales dependientes del Congreso Nacional.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Mera.

Sr. Mera. — Señor presidente, señoras y señores senadores: en este momento en que, desde una banca, uno tiene que asumir la responsabilidad de tratar un tema tan grave como la intervención a una provincia, más aún si es de su provincia, en un acto de madurez, uno tiene que ver la historia que, como bien decía el senador que anteriormente hizo uso de la palabra, se inicia hace muchísimos años.

Pero de nada nos valdría ver o estudiar la historia si de ella no recogemos sus frutos, si no somos lo suficientemente humildes y si no somos lo suficientemente transparentes como para aprender de ella.

No me quiero sentar en una banca de un partido político, aunque orgullosamente pertenezco, he pertenecido y perteneceré al Partido Justicialista. Pero no lo quiero hacer. Quiero hacerlo en un ámbito en donde se confundan las banderías políticas. Quiero que lo hagamos en un acto de argentinos, con total y absoluta responsabilidad. Pónganse en mi lugar, no puedo mirar a Santiago del Estero desde el punto de

vista de los justicialistas y de los radicales, o de cualquier otro partido político. Tengo que mirar a la provincia en su conjunto, en su historia, en sus antecedentes y en la actualidad, pero también tengo que empezar a proyectar el porvenir.

Es entonces que desde esta óptica, y mirando desde esta altura, asumo la responsabilidad de mis palabras en este momento. Dejemos las historias recientes de lado —la historia de la última intervención federal— porque se va a empezar a confundir política con real y auténtica historia. Tampoco intentemos siquiera poner en tela de juicio la actitud del señor ministro del Interior, según los reclamos de algunos anteriores senadores que he escuchado. El señor ministro del Interior no va a venir a hablar aquí por mí, yo voy a hablar por lo que sé, por lo que he vivido y por cómo he estado. Y les voy a contar también cómo me he despertado. Fue el llanto de una mujer, esa mezcla de alarido y lágrimas de una madre en reclamo de justicia, el que hizo despertar a todas las estructuras políticas no solamente de Santiago del Estero sino también de la Nación Argentina. Ese despertar conmovió todas las estructuras políticas por el llanto de una madre que venía bregando para que se investigue, nada más y nada menos, la muerte de su hija, que había sido consecuencia de la muerte aparentemente anterior de otra joven de Santiago del Estero. Una madre y un padre que reclamaban conmovieron las estructuras e hicieron despertar a una provincia y a una Nación.

Por otra parte, había habido algunos antecedentes en el actual período constitucional. Es que no pasó demasiado tiempo cuando ya el gobernador elegido constitucionalmente, el doctor Carlos Díaz, renunciaba a sus funciones y asumía la señora Mercedes Marina Aragonés de Juárez, y como vicegobernador —en reemplazo de ella— lo hacía el ex presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, el doctor Darío Moreno. Al poco tiempo y por este motivo, empezaron a circular nombres de políticos acusados por esta madre y por el pueblo, y entre ellos el del hijo del doctor Darío Moreno. En este momento, debo reconocer que no ha sido siquiera hasta hoy mencionado en la causa. No digo procesado; ni siquiera mencionado. Por supuesto, tuvo que renunciar también y asumió el actual vicegobernador, el doctor Botta.

A partir de este llanto se transformó la realidad y, como en un abrir y cerrar de ojos, empezamos a ver una realidad cruel, porque estaban institucionalizadas verdaderas aberraciones. ¡Y cómo no! ¡Sí, es verdad! El señor Musa Azar, uno de los principales imputados en este tema, tenía una larga y lamentable historia.

El había ejercido un poder omnipotente dentro de las estructuras policíacas de la provincia de Santiago del Estero, dirigiendo los organismos de los departamentos de investigaciones de la provincia. Claro, es que Musa Azar no tenía una procedencia justamente dentro de la vida democrática; él tenía otro tipo de procedencia y otro tipo de antecedentes que, aparentemente, lo habían marcado. Lo habían marcado y él, a su vez, ha marcado a toda la provincia de Santiago del Estero.

Cuarenta años. Es larga la historia. Hoy no soy quién para juzgar. ¿Pero por qué sé que el Poder Judicial no funcionaba adecuadamente? Y, fíjense, vamos al caso específico de La Pársena, de este doble crimen aberrante y miserable que todavía no se ha logrado develar. Se “comió” al juez que, justamente, era titular en el juzgado de La Banda, que entendía en la causa, el doctor Castillo Solá. Por supuesto, destituido por juicio político y preso.

Inmediatamente se transformó el Poder Judicial de Santiago del Estero, con la renuncia de todos los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de dicha provincia. Actualmente se reemplazó por otro, que funciona hasta hoy. Este mismo tribunal, cuando uno o dos sacerdotes de Santiago presentaron un recurso de hábeas data para saber de las inmundicias que cometía el señor Musa Azar con sus investigaciones, el actual Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, les negó el recurso de hábeas data.

Tres o cuatro meses después se viene a develar la gran incógnita. Nadie sabía, y un pedido se transforma hoy en diez mil denuncias presentadas ante los juzgados. Y según lo que dicen los que investigaron el tema —la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación—, en treinta mil seres humanos, aproximadamente, investigados en nuestra provincia.

Por supuesto, se trata de algo violatorio de cualquier norma de seguridad nacional que no delega en nuestra provincia este tipo de servicios.

Hemos esperado —y digo “hemos”, porque lo he hecho con mi compañera— hasta último momento la resolución de algunos temas por parte del Poder Legislativo de la provincia; Poder Legislativo seriamente cuestionado, porque diez o doce de sus integrantes también están imputados en otro tipo de causas y en otro tipo de delitos.

Decía que hemos esperado pacientemente que se resolviera el problema dentro de las instituciones propias de Santiago del Estero. Lamentablemente, esta espera fue en vano. Y es ahí entonces en donde el Poder Ejecutivo nacional asume su responsabilidad. Y es ahí entonces, en un tiempo en donde quizás, si dejamos esperar, pasa la historia, y vamos a cargar sobre nosotros lo que puede ser el resultado de la división profunda de la sociedad de Santiago del Estero; no desde el punto de vista ideológico sino de los distintos sentimientos que existen hoy de dolor; las pasiones han empezado a florecer por todos lados. Las acusaciones y las defensas hablan de un pueblo disgregado íntimamente dentro de su sociedad.

No se trata de renunciar a la historia de uno. Se trata de ver la historia de una provincia, de todos sus habitantes, y, también, de asumir las culpas propias que a uno le toca asumir en un acto de total y absoluta humildad. Esto no lo construye una sola persona. Esto lo hacemos entre varios.

En este acto de responsabilidad y madurez es que estoy aquí, asumiendo mi responsabilidad y expresándola.

Quiero simplemente decirles a los señores senadores que comprendan el tremendo dolor que a uno lo embarga en estos momentos tan difíciles que le toca vivir. Pero así es la vida. El hombre público está expuesto a este tipo de cosas y también, gracias a Dios, a madurar a través de todas estas circunstancias.

Quiero decirles que, desde mi provincia, estoy absolutamente seguro de que quien reemplaza al actual gobierno constitucional va a hacer las cosas muy bien.

Hay un pueblo —no solamente yo— que ha despertado y ha madurado en poco tiempo. Pero ha madurado a través de lo que ha aprendido. Y ha aprendido de repente, como si se le hubiesen abierto las puertas y hubiese entrado la luz en un cuarto lleno de oscuridad.

Es por esto que agradezco la adhesión de otros señores senadores de distintas banderías políticas a la intervención federal a nuestra provincia. No dudo de que es un acto de total y absoluta responsabilidad, porque confío en el gobierno federal. Y lo no digo desde el punto de vista partidario, porque sería demasiado bajo de mi parte analizarlo desde ese ángulo. Son demasiadas vidas de hombres y mujeres que piensan distinto y que hay que respetar en su forma de ser y de pensar.

Por todo lo que he dicho, agradezco, por supuesto, a los integrantes de mi bancada que han acompañado este proyecto y que me han cobijado en estos días muy difíciles que a nosotros nos ha tocado vivir.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Castro.

Sra. Castro. — Señor presidente: voy a ser breve porque creo que el senador que me ha precedido en el uso de la palabra ha sido lo suficientemente concreto para hacer un resumen de la situación que hoy atraviesa mi provincia.

Para mí también es muy doloroso tener que tratar hoy la intervención de Santiago del Estero porque respondo al mismo partido político que hoy ocupa el gobierno provincial. Pero, tampoco puedo dejar de decir que, junto con otros legisladores nacionales, provinciales y un grupo de intendentes, hemos hecho innumerables esfuerzos —quizá, en silencio para muchos— con el convencimiento de que la crisis en mi provincia era de tal envergadura que necesitaba ser escuchada y resuelta desde la Nación, porque el quiebre institucional hacía irreconciliable la situación entre la ciudadanía y el Ejecutivo provincial.

Por ello, alguna vez en mi bloque supe decir que mi provincia, como madre de ciudades, merecía crecer, desarrollarse y producir con justicia y con respeto por los derechos humanos. Y todos supieron comprenderme; incluso, hubo un grupo de legisladores que también vinieron aquí y fueron escuchados. Tal vez, porque algunos pensábamos diferente hemos sido objeto de distintos tipos de persecución.

Quizá no sea yo el ejemplo más claro para demostrar lo que, a veces, de manera tremenda se hizo en mi provincia. Como síntesis, puedo decir con todo dolor que mi familia ha sufrido el mayor de los atropellos. Un claro ejemplo de

demostración de independencia de los poderes era, precisamente, la justicia. Allí, una hermana mía ocupaba un juzgado desde hacía veinte años, habiendo pasado por intervenciones y por distintos gobiernos y habiendo realizado todo tipo de exámenes a fin de probar su capacidad e idoneidad para desempeñarse en ese cargo. Sin embargo, ése debía ser el primer ejemplo: se le exigió su renuncia y ella exigió un juicio político. Le fueron negados absolutamente todos los pasos y los procesos para poder probar su inocencia frente a denuncias realmente aberrantes. Eso ha sido motivo para que a través de pasquines, que circulan en mi provincia como moneda corriente, se atropellen la privacidad de las personas, el respeto por la familia y por nuestros hijos, y se ponga en duda la honestidad de las personas. Eso pasó a ser moneda corriente con todos los que tenían una opinión diferente. Esto llegó a un punto tal que para conseguir su renuncia tuvieron que atropellar contra mi madre, una mujer de 77 años que vive sólo acompañada de una empleada, durante la noche de Navidad, una fiesta de celebración cristiana y de la familia.

Hoy les puedo decir, con mucho dolor –lo que he repetido muchas veces en mi bloque–, que hasta el día de hoy mi madre, a pesar de vivir enrejada y con seguridad, sube la escalera de su departamento temblando y con terror de volver a vivir esa situación, que sufrió dos veces más. Todos estos hechos fueron denunciados y existe constancia de esas denuncias, pero jamás se investigó ni se me dio respuesta alguna.

Hasta hemos llegado a encontrar el ingreso a su departamento pintado todo de negro. ¿Qué significaba eso? ¿Qué manera de aterrorizar a una familia para conseguir un objetivo!

Con el mismo dolor que el senador Mera, debo reconocer que no queda otro remedio porque, sinceramente, la sociedad de Santiago del Estero reclama un cambio absoluto y el respeto absoluto por la libertad, por la libre elección y por la voluntad popular.

Para finalizar, deseo expresar que me veo obligada a votar la intervención federal de mi provincia.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en primer lugar quiero decir que considero que

la intervención federal es una decisión no revisable judicialmente, discrecional por parte del poder político y exclusiva del Congreso de la Nación. Por lo tanto, discrepo con lo manifestado por algunos de mis pares.

Antes de pasar a los presupuestos fácticos y en relación a lo expresado por el senador Zavaglia acerca de la existencia en Santiago del Estero de un sistema político de oprobio y de autoridades elegidas en igual sentido, debo decir que si dejara pasar estas consideraciones estaría haciéndome cómplice de los cargos hacia la persona de los compañeros santiagueños de mi bancada, que, tal como ya lo han manifestado, representan al pueblo de su provincia.

Y debo expresar también que lo que ha manifestado el senador Gómez Díez como fundamento respecto del sistema electoral ya lo venía escuchando de su antecesor –el ex senador Ulloa–, a quien aprecio y respeto mucho. El planteaba esa misma queja en relación a la provincia de Salta allá por 2001. Cuando se quiso hacer la primera reforma política, él fue uno de los que se opusieron a ese sistema porque consideraba que de esa manera los partidos mayoritarios podrían aplastar a los minoritarios.

Sr. López Arias. – ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

Sra. Negre de Alonso. – Sí, señor senador.

Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador López Arias.

Sr. López Arias. – Señor presidente: conozco el discurso del ex senador Ulloa. El se refería a una ley de lemas que ya no se encuentra vigente en mi provincia. Se han hecho reformas constitucionales y políticas, inclusive de común acuerdo. Por lo tanto, creo que ese tipo de argumentos ya no se dan.

En consecuencia, le solicito a la señora senadora con todo respeto que no nos utilice de ejemplo porque son situaciones totalmente distintas. El caso de Santiago del Estero es único y excepcional, lo cual me consta por pertenecer a una provincia vecina.

La situación que estamos analizando no es comparable con la de otras provincias y, por favor, menos con la mía.

Sr. Gómez Díez. – ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.

Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Gómez Díez.

Sr. Gómez Díez. – Señor presidente: haciéndome eco de lo que acaba de manifestar el senador López Arias, debo decir que no he querido traer a colación los temas de mi provincia porque no son los que están en discusión, como tampoco he tratado los de San Luis, sobre los cuales hay mucho que decir.

Por lo tanto, sugiero que nos centremos en la cuestión en análisis, qué es la intervención de Santiago del Estero, y que dejemos las situaciones de otras provincias para cuando sea pertinente. Caso contrario nos iremos de la cuestión en tratamiento.

Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

Sra. Negre de Alonso. – Sí, se la concedo.

Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: afectuosamente le pido a la senadora que nos centralicemos en el tema en debate, que es la situación de la provincia de Santiago del Estero.

Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: le digo al señor senador Gómez Díez que puede hablar con toda tranquilidad de mi provincia, y que las dudas que tenga se las puedo responder punto por punto.

También se habló aquí acerca de que el sistema electoral de Santiago del Estero producía un avasallamiento de la mayoría sobre las minorías desde hace diez años. Estuve mirando la Constitución de Santiago del Estero y veo que la última reforma es de octubre de 2002.

Finalmente, también quiero contestar otra cosa que no puedo dejar pasar, porque el senador por Santa Fe, que es nuevo, mencionó que habría una reforma política pendiente. En tal sentido, quiero recordar que algunos senadores que hoy estamos en estas bancas, allá por fines de 2002 y principios de 2003, cuando empezó la Mesa del Diálogo, estuvimos reunidos con sus representantes, impulsamos una reforma política y presentamos proyectos, pero nunca logra-

mos ni siquiera el quórum en la comisión para emitir dictamen. O sea que si bien está pendiente una reforma –eso lo comparto–, ha habido innumerables intenciones de eliminar las listas sábana, de llevar a cabo elecciones simultáneas y abiertas para todos los partidos, de declarar emergencia política y caducidad de mandatos, etcétera.

¿Por qué voy a votar en contra de la intervención a Santiago del Estero? Lo voy a hacer, porque creo que no están o por lo menos no hemos tenido la oportunidad y el tiempo necesarios como para corroborar los presupuestos fácticos que los fundamentos del proyecto están dando.

Entre las causales el proyecto indica: primero, que el desempeño de funcionarios del Poder Ejecutivo ha sido motivo de numerosas denuncias que alcanzan desde la negligencia y lentitud administrativa hasta la casi nulidad de los derechos laborales de los agentes del Estado provincial. Lentitud y negligencia administrativas me parece que no constituyen un supuesto fáctico para la intervención. Y la nulidad de los derechos laborales abre las vías jurisdiccionales y el recurso extraordinario por arbitrariedad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo con lo que de aquí surge existen otras vías que permiten remediar la situación sin recurrir a la intervención federal.

Pero vamos a la segunda problemática: la Legislatura local. Dice el proyecto que se destaca que un considerable número de sus integrantes han sido involucrados judicialmente en distintas causas y se les ha requerido el desafuero. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el desafuero. Si hay comisión de delitos e irregularidades, estoy absolutamente conteste con el desafuero. Y también estoy de acuerdo con sacar a alguien de una banca, como aquí voté yo el año pasado para destituir de su cargo a un senador que creíamos había cometido delitos y violado los derechos humanos de los integrantes del pueblo de una provincia. Así que creo que también hay mecanismos institucionales propios dentro del sistema para poder solucionar un tema de este tipo. Asimismo, hay suplentes para reemplazar a aquellos que sean destituidos de sus bancas.

El tercer tema al que acá se ha hecho mención, es el accionar de la institución policial, que

ha sido objeto de permanentes cuestionamientos. Se indican entre los fundamentos la falta de profesionalidad, desapego a las formas institucionales y violaciones a la ley orgánica policial. Estoy refiriéndome exclusivamente a lo que dicen los fundamentos del proyecto.

El cuarto punto es el que se refiere al Poder Judicial y también fue mencionado por casi todos los señores senadores: falta de independencia, morosidad y poner en riesgo el mandato constitucional de administrar justicia.

Entonces, me puse a estudiar cómo era la Constitución de Santiago del Estero y, en primer lugar, traté de averiguar la forma de designación de los miembros del Poder Judicial. Así, determiné que ella se realiza a través de un Consejo de la Magistratura, integrado por legisladores elegidos por sorteo y por abogados de la matrícula, elegidos a través del voto directo de los matriculados, quienes duran dos años en sus funciones.

¿Y cómo se destituyen los jueces? La Constitución de Santiago del Estero, como casi todas las Constituciones provinciales más modernas, cuenta con un jurado de enjuiciamiento. Anteriormente, los jueces eran destituidos por la Cámara de Diputados y, en consecuencia, se trataba de un procedimiento meramente político. Pero este Jurado de Enjuiciamiento, de acuerdo con la Constitución, está integrado por tres legisladores —dos por la mayoría y uno por la minoría—, por tres abogados, elegidos por el voto directo de sus colegas; y por tres magistrados judiciales elegidos mediante sorteo.

Entonces, me pregunto y esto lo hago extensivo a mis colegas justicialistas de la provincia de Santiago del Estero, con todo el respeto y la solidaridad que me merecen, si los mecanismos institucionales y constitucionales propios no podían o no pueden solucionar la crisis de esa provincia.

Además...

Sr. Presidente (Guinle). — Señora senadora por San Luis: el señor senador Zavallía le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sra. Negre de Alonso. — Sí, con mucho gusto.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Zavallía.

Sr. Zavallía. — Señor presidente: simplemente quiero aclarar que tanto en la designación como en la destitución de los jueces, en el Con-

sejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento, el gobierno provincial tiene mayoría para destituir y designar a su antojo a los jueces que quiera. O sea que no existe equilibrio político alguno en el Consejo de la Magistratura ni en el Jurado de Enjuiciamiento.

Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora por San Luis.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: la reflexión que formula el señor senador Zavallía me hace pensar que todos los abogados deben responder al poder político...

Sra. Conti. — Si pidieron la intervención los abogados...

Sr. Presidente (Guinle). — Por favor, señores senadores, permitan continuar a la oradora su exposición.

Sra. Negre de Alonso. — La última reflexión que quiero efectuar es que, en octubre de 2003, el entonces gobernador y la vicegobernadora —hoy gobernadora en la provincia por los motivos que ha apuntado el señor senador Mera—, fueron votados por más del 60 por ciento de la población. Entonces, ¿qué pasó en tan pocos meses?

Pero además desde hace diez años hasta hoy se han producido sucesivas elecciones y ellos han sido ratificados de una y otra forma, porque Juárez fue senador hace poco tiempo. Incluso, el señor senador Mera ha reemplazado al señor senador Juárez en el nuevo Senado, luego de que aquél fuera elegido por el voto directo de su pueblo. Está claro que posteriormente renunció, pero el señor senador Juárez juró con nosotros, junto con la señora senadora Castro.

Entonces, me pregunto si, luego de tan pocos meses de una elección tan contundente como la que se produjo en Santiago del Estero, existen fundamentos como para llevar a cabo una intervención federal.

Por otra parte, no he podido ver las cajas. Siempre me ha gustado investigar los temas, revolver las cosas y estudiar. En este cuerpo hemos tenido varios procesos de mucha investigación, como el juicio a uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en esta oportunidad no hemos tenido ocasión de hacerlo.

Entonces, si bien exclusivamente he podido organizar el estudio sobre esto y una síntesis que

nos fue entregada hoy en el bloque, que acompañaba este proyecto del Poder Ejecutivo, a mi entender no están probados los presupuestos fácticos —no puedo decir que no están dados— para que desde el Parlamento argentino desplacemos a los tres poderes del Estado de una provincia argentina, que acaba de salir de un proceso electoral con resultados absolutamente contundentes en cuanto al porcentaje de votos.

Por esas razones, voy a votar por la negativa.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, licenciado Daniel Scioli.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Prades.

Sr. Prades. — Señor presidente: he escuchado con mucha atención las expresiones vertidas fundamental y especialmente por los señores senadores de la provincia cuya intervención se pide. Todo esto realmente debe ser doloroso y preocupante para ellos, no sólo por la significación de esta sesión, por la decisión que al final se tome y, fundamentalmente, porque luego deben volver a su provincia y ver las caras de sus conciudadanos.

Además, he tratado de extraer de los distintos senadores que han preopinado algunos comunes denominadores referidos no solamente a Santiago del Estero sino también a algunas otras provincias.

Con relación al tema de la doctrina constitucional, y encontrando la regla del reconocimiento, a efectos de ver las normas aplicables a este caso, sin duda que son el artículo 6º, el artículo 75, inciso 31), y el artículo 99, inciso 20), estos dos últimos por imperio de la reforma constitucional de 1994.

A nivel nacional, últimamente hemos visto con beneplácito y satisfacción de todos los que estamos acá, que en definitiva representamos al único estamento federal que existe en esta Capital y que representa genuinamente los intereses de las provincias, la propuesta de iniciativas para mejorar la calidad institucional del país, transparentar los procedimientos, mejorar la justicia, acelerar los trámites y evitar la burocracia. Totalmente de acuerdo.

Pero este país tiene muchas provincias, al Sur, al Norte, al Este, al Oeste y en el centro, que

forman parte también de la necesidad de su mejoramiento en lo que respecta a la calidad de sus instituciones. Y anticipo que no voy a hablar de provincia alguna ni mucho menos de los partidos políticos que las gobiernan. Esto va para propios y extraños.

Cuando hablamos de la transparencia y del mejoramiento de la calidad institucional no podemos prescindir de las provincias, que nacieron antes que el propio país. Por lo tanto, allá quiero ir y decir algunas cosas.

Un punto de coincidencia. Hay una ley nociva, inconstitucional, arbitraria, ilegítima, ilegal. Todas las calificaciones jurídicas posibles se le pueden hacer a una ley que conspira contra uno de los artículos esenciales de la Constitución Nacional, que es el 38, que determina que los partidos políticos son los vehículos fundamentales del sistema.

Me refiero a la ley de lemas. Digo esto porque esa norma está enraizada como ley electoral en la gran mayoría de las provincias argentinas e instala gobernantes que carecen de legítima representatividad, en fraude al electorado, porque por el efecto de la transferencia de votos se termina eligiendo a un ciudadano que no se votó.

En su oportunidad presenté un proyecto de ley —que lamentablemente, a pesar de mi insistencia, nunca pudo ser tratado—, reformando el artículo 9º del Código Electoral, precisando y determinando la no transferencia del voto, a los efectos de que cayeran todas las leyes de lemas que existen en la Argentina, impidiendo que la calidad institucional o representatividad sig^{en} existiendo en muchas provincias argentinas. No tuvimos suerte, esta ley sigue estando, conspira contra el artículo 38 de la Constitución Nacional y, fundamentalmente, instala a ciudadanos con poca representatividad, lo que degrada y desmerece la calidad institucional de la provincia de que se trate.

Otro fenómeno que ha existido en el país y que ha conspirado contra el sistema republicano de gobierno lo constituyen las reelecciones indefinidas; se instalan gobernantes que sostienen una contrariedad contra el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece el principio de igualdad ante la ley; igualdad entre los iguales y desigualdad entre los desiguales.

Y claro, porque la competencia entre el que está en el llano y el que está en el poder es

abismal; máxime en las épocas de crisis, fundamentalmente económica y social, como vive la inmensa mayoría de las provincias argentinas. Entonces, el que tiene el poder obviamente que posee muchas más ventajas que el que no lo ejerce.

Ni hablemos de las leyes electorales. Como consecuencia de la ley de lemas, de las reelecciones indefinidas, se instalan en el poder y, así, luego se reforman las leyes electorales para seguir estando en el poder. Y cuando un gobierno está mucho tiempo en el poder —y a nosotros nos ha pasado, me pongo el sayo en ese sentido— termina muy mal, ya sea cometiendo actos de corrupción, hechos delictivos, llevando a cabo un mal desempeño de las funciones, etcétera.

Bien señalaba el señor senador por Salta, de la minoría —y creo que en ese sentido lo apoyó el señor senador por Santa Fe, también de la minoría—, que son las leyes electorales las que engañan a la sociedad e instalan indebidamente y conspirando contra el sistema republicano de gobierno a mayorías y minorías que no son tales. No puede haber un sistema republicano de gobierno sin el necesario contrapeso de la minoría, que no tiene por qué poner palos en la rueda sino que está para señalar los desaciertos del gobierno, a fin de que rectifique su rumbo, y apoyar todo aquello que haga para el bien de la provincia o de la Nación, según la jurisdicción de que se trate.

Además, en Santiago del Estero no hay división de los poderes; y al respecto yo he escuchado a numerosos senadores de provincias justicialistas y radicales señalar que ello es esencial en un sistema republicano. En una provincia o en un país en donde no exista la división de los poderes no puede exigirse calidad institucional ni se puede impedir que el día de mañana le toque una intervención en los términos del artículo 6º de la Constitución, porque precisamente toda esta serie de factores que se conjugan, conspiran contra el sistema y, obviamente, con el tiempo se le vuelven en contra al propio gobernante que se ha instalado en el poder de manera cuasi permanente.

Ni hablemos de los jueces. Al no haber división de los poderes y Justicia independiente, los magistrados son afines al poder —ya sea por designación o por ejercicio— y, en definitiva, ter-

minan solamente diciendo en sus sentencias que el Estado tiene la razón o, lo que es más grave, que el gobierno tiene la Nación.

Con respecto a la libertad de prensa, aquellos a los que por desgracia les toca ser minoría, cualquiera sea el gobierno y el partido de que se trate, no tienen la posibilidad de aparecer en los medios de difusión como realmente tiene el oficialismo. Yo les diría que en muchas provincias es cien a uno. Pero se llevan a cabo otras prácticas; se compran adversarios, porque es tanta la inmunidad que otorga la perpetuación en el poder que se compran adversarios para que salgan a hablar mal del partido político que es oposición, ya que la hacen los mismos opositores para lo que se llama la “gilada”, que es el pueblo, que es en definitiva el que pone al gobierno en el poder. Es decir, hay un claro sentido feudal en la inmensa mayoría, si no en todas las provincias argentinas.

El clientelismo es uno de los factores fundamentales, porque el Estado lo decide todo. A ver, si soy abogado y soy opositor, me sacan la sentencia en contra. Si soy médico, como la única obra social con preponderancia es la del Estado provincial, me sacan, como profesional, de la lista de médicos de la provincia. Si soy comerciante y estoy en contra, no me dan concurso; no tengo participación en una licitación o salgo último.

En definitiva, ésta es la situación de muchísimas provincias argentinas —y no quiero generalizar, porque tal vez haya algunas que no están en esa situación— y la de Santiago del Estero. Y esto no lo digo porque lo leí, lo estudié, me lo dijeron o lo vi, sino porque he escuchado a sus genuinos representantes, en este instituto federal que es el Senado de la Nación, exteriorizar palmariamente y patéticamente esa situación.

Y si no mejoramos la calidad de las instituciones, si no devolvemos la verdadera proporcionalidad a la mayoría y a las minorías de las provincias, si no aseguramos la libertad de expresión, si no aseguramos la independencia y el pleno ejercicio de la división de los poderes, la periodicidad de las funciones como elemento esencial del sistema republicano, esto tiene efecto de rebote en la Nación; la patología se extiende a la Nación toda. Y muchos de los que estamos acá somos conscientes de que, en los momentos difíciles y graves del país, cuando

tuvimos cinco presidentes en una semana y todos estábamos desesperados para sacar las cosas adelante, sin importar quién era el presidente o cuál era el partido, queríamos que el país saliera y que el principio establecido en el artículo 22 de la Constitución —el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes— tuviera fortaleza y firmeza institucional, porque la anarquía y el caos dominaban las calles, fundamentalmente de Buenos Aires. Varios senadores, de todos los partidos, señalamos que esto estaba pasando, que era necesario cambiar y rectificar.

En consecuencia, somos nosotros, como representantes de esos estados autónomos, los que tenemos la obligación, en cada uno de nuestros estados independientes, de señalar y afianzar este tipo de cuestiones. Porque no vale la transparencia en Buenos Aires si no existe en las provincias. Y, además, si no existe en las provincias, en Buenos Aires está encubierta; no es franca y tiene un fuerte sentido de hipocresía.

Esto lo digo desde el mayor de los sentimientos y respeto por los amigos del justicialismo y por mis amigos radicales. Pero lo hago inspirado en algo que es fundamental y esencial, que es consolidar un sistema institucional y, fundamentalmente, asegurar que las provincias sean autónomas.

¿Cómo no voy a entender a la señora senadora por San Luis en su votación? Puede instalarse en el país un efecto cascada. Tenemos la obligación de advertirlo y evitarlo, no porque haya deseos de que se lleve a cabo sino porque las circunstancias, los hechos y la vertiginosidad institucional de los últimos tiempos del país muchas veces nos llevan a situaciones que nos hacen andar prácticamente en la cornisa de las instituciones.

No se trata de intervenir sólo a las provincias que no me responden. Se trata de mejorar la calidad institucional en serio. No es necesario que el gobierno federal intervenga, como remedio del artículo 6º de la Constitución Nacional. No es bueno. Y bien lo decía el señor senador preopinante, en el sentido de que no hacemos nada si atacamos los efectos y dejamos de lado las causas. ¿De qué nos sirve que se intervenga Santiago del Estero, que el interventor llame a elecciones y se elijan las autoridades, si el sis-

tema sigue corrupto en su médula institucional? ¡Vamos a volver a intervenir la provincia dentro de dos o tres años!

Entonces, si no mejoramos el fondo, por más que cambiemos la forma, la patología de las instituciones argentinas seguirá vigente, y las esperanzas que tenemos todos y cada uno de nosotros de mejorar la calidad de las instituciones se verán una vez más frustradas. Pero no somos nosotros, es la gente la que nos puso en esta banca.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Señor presidente: en la Argentina contemporánea el Parlamento nunca le dijo que no o le retaceó el apoyo a un presidente que decidiera intervenir una provincia. Evidentemente, cuando se llega a esa situación es porque hay una evaluación de la situación del Estado provincial que torna imposible cualquier otra solución que no sea a través del remedio federal.

En este caso, más que nunca, el presidente de la República agotó absolutamente todas las instancias de solución a través de los mecanismos que prevé la autonomía provincial para los problemas en Santiago del Estero. Han sido innumerables los viajes de los funcionarios como el secretario de Justicia y el secretario de Derechos Humanos. También han sido innumerables los contactos —como bien lo decían el compañero Mera y la compañera Castro— con la Legislatura provincial a los efectos de que dentro de las instituciones de la provincia puedan ponerse en marcha mecanismos que eviten este gravísimo remedio federal.

En última instancia, el presidente ha tomado la decisión teniendo en cuenta todo el sentido del remedio federal. La intervención federal es el último remedio que queda. Nadie duda de eso y mucho menos en este Parlamento. Por eso el apoyo masivo que todos le damos a la iniciativa.

Lamentablemente, tienen que ocurrir muertes. En los últimos tiempos, varias intervenciones federales se han sucedido luego de la muerte de ciudadanos que ha conmocionado a las sociedades provinciales. Eso pasó en Catamarca, en Corrientes, y ahora pasa en Santiago del Estero. Son situaciones de gravísima conmoción social que podrían haber sido evitadas. Si desde los organismos pertinentes del Estado na-

cional se hubiese seguido atentamente la evolución de los acontecimientos en cada Estado provincial, se podría haber evitado el remedio federal. La situación más grave por la que pasa un Parlamento es la intervención de un estado provincial.

Por eso, no tengo dudas y no necesito que venga un funcionario para convencerme de que tengo que votar, porque creo que la decisión del presidente ha sido atinada. Pero si hubiese sido correcta la presencia del ministro del Interior. Creo que ésta debe ser la primera vez que en este Senado se decide una intervención federal o, el ministro del área no está presente. Me imagino —quiero creer— que no pudo venir a este Parlamento porque estuvo muy ocupado.

Reitero, no quiero que venga el ministro a convencerme de que tengo que votar, porque confío en que ha sido atinada la decisión presidencial. Aunque no fuese atinada, dilatar la decisión significa causar un daño aún mayor que la propia decisión por más incorrecta que sea. En este caso, la decisión es correcta y hay que adoptarla en el tiempo necesario para evitar males mayores. Pero si hay otros aspectos que desde este Senado necesitamos saber, y únicamente la presencia del ministro del área en los bloques parlamentarios, por lo menos, podría haber dado las respuestas que necesitamos.

Dejo planteadas algunas de las inquietudes que tengo. En primer lugar, qué medidas ha tomado el Estado federal a efectos de resguardar la vida y la hacienda de los ciudadanos; es decir, si se ha dispuesto o no el envío de tropas federales.

En segundo lugar quiero señalar que este tipo de temas tiene que ingresar por el Senado. Somos la cámara que representa a los Estados provinciales. Por más que la Constitución no lo diga, la Cámara iniciadora tiene que ser el Senado. Y no lo digo por un problema de celos entre las Cámaras. Por ejemplo, se ha tocado el tema de la intervención al Poder Judicial. Acá le estamos dando al interventor facultades no solamente respecto de los poderes constituidos, sino también facultades constituyentes, porque estamos poniendo en comisión a los jueces del Poder Judicial. Obviamente que es absolutamente legal y legítimo el remedio federal en toda su dimensión. Ahora, bien, ¿cuáles son las connotaciones? ¿Tiene facultades para remover? Si

se pone en comisión a los jueces, tendrá facultades para removerlos. Si remueve jueces, ¿cómo los designa? ¿Los designa él? ¿No es posible prever un mecanismo de transparencia en la designación de los jueces? No vaya a ser que suceda lo que ocurrió en otras intervenciones federales. Por eso son las dudas de muchos señores senadores. Porque llegan los interventores a las provincias, se van y dejan la cría. Este es el problema que sufren las provincias cuando se van los interventores. Lo sufrió Corrientes, lo sufrió Santiago, lo sufrió Catamarca. Todas las provincias que han sido intervenidas sufrieron los efectos de las crías que dejaron los interventores. No tienen buena fama las intervenciones federales en las provincias, pero son el último remedio que queda.

Entonces, este tema de qué hace con el Poder Judicial la intervención federal, en su momento se planteó cuando, en el gobierno del presidente de la Rúa se intervino la provincia de Corrientes. Recuerdo que en ese momento nosotros planteamos que había que buscar en el texto legal un mecanismo para prever esa situación. Es decir, si se pone en comisión a los jueces y se les otorga facultad para remover y designar en consecuencia, esto también tiene que ser en comisión, obviamente. No se le puede otorgar la legitimidad que da la Constitución a la designación de un juez por parte de un interventor.

Ahora, si no lo ponemos claramente, si no queda claro esto, el interventor tiene facultades constituyentes, no solamente respecto del poder constituido. Entonces, bien puede llegar, poner en comisión, como dice la ley —están ya todos en comisión, porque los pusimos nosotros—, remover al que quiera, designar y dejar la cría en el Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero. Y no hay un mecanismo de concurso que garantice la idoneidad, que vaya cambiando los sistemas, que es la raíz de los problemas de muchos estados provinciales.

Coincido con muchos señores senadores en que el problema de nuestras provincias no es el problema circunstancial de los hombres que las conducen ni mucho menos del régimen electoral.

En ese sentido, soy un crítico de la ley de lemas que también tenemos en mi provincia. Pero el problema no es el régimen electoral, porque es

optar por un régimen que privilegie el voto al partido o un régimen que privilegie el voto al candidato. Algunas provincias eligieron el régimen que privilegia el voto al partido. Con ese mismo sistema, en la oposición que encaro en La Rioja sacamos casi la mitad de los votos. La ley de lemas no está impidiendo, en sí misma, la participación popular. Quizás, lo que haya que revisar sea... Pero esto no lo podemos hacer nosotros. Justamente es esto lo que yo quería plantearle al ministro del Interior: impulsar un pacto político institucional en la Argentina que garantice que en los regímenes de adjudicación de los escaños en los cuerpos legislativos y deliberativos haya efectiva participación de las minorías, porque se producen este tipo de situaciones feudales como consecuencia de la falta de controles y de la eliminación de plano de la participación de las minorías en las instituciones de las provincias: no hay controles, son sistemas absolutos, absolutistas, y los regímenes que otorgan la representación de los ciudadanos en los cuerpos legislativos son absolutamente favorables a la concentración del poder. Por eso ocurre, como en Santiago del Estero, que el que gana se lleva los dos tercios y la proporcionalidad se da solamente en un tercio de la representación.

Cuando vienen al Senado los apologistas de la reforma política, que son las organizaciones —con todo cariño lo digo— de los amigos de la Capital Federal, y piden el voto uninominal para transparentar la representación, yo les digo que no hay cosa más nociva que el sistema uninominal de representación. Esto es lo que elimina la participación de las minorías. Esto es lo que pasa en muchas provincias. El problema es que se eligen tantas circunscripciones en las provincias y se elige un solo legislador por cada circunscripción. Cualquiera sea el sistema electoral, el que gana se lo lleva. Naturalmente se da que el que ganó la elección, gana la inmensa mayoría de los departamentos, con lo cual tiene la abrumadora mayoría de la Legislatura.

No hay sistema más nocivo que la representación uninominal. Uno lee las solicitudes por la reforma política de las organizaciones ciudadanas y advierte que en ellas se exige el sistema uninominal de representación legislativa y nos condenan por no votarlo.

Hay que impulsar un pacto político en el país. Hay que tratar de democratizar las institucio-

nes de nuestras provincias, para evitar luego tener que venir con el remedio federal. Si no, después de la muerte de ciudadanos, producto de estados absolutistas, cuando ya empiezan a escasear las garantías de los ciudadanos porque el poder está absolutamente concentrado y sin controles y la mitad de los ciudadanos no tienen representación institucional, viene el remedio federal.

Hay que democratizar las instituciones a través de un pacto político institucional. Obviamente, a este gobierno no se le puede adjudicar responsabilidad alguna en la situación de los estados provinciales. Pero creo que nosotros estamos acompañando al presidente, porque vemos la enorme vocación que tiene de transformar estructuras anacrónicas de las instituciones y de la sociedad. Es imprescindible democratizar las instituciones de las provincias, de lo contrario, no hay cambio posible en la Argentina. Si no se avanza en hacer tabla rasa con esas instituciones degradadas y los sistemas feudales de muchas provincias argentinas —no quiero generalizar— no hay cambio posible en la Argentina. El gran enemigo del cambio son los regímenes feudales.

Si queremos cambiar la educación, la misma es la que dan las provincias argentinas. El Ministerio de Educación de la Nación no tiene una sola escuela. La política educativa y las escuelas son de las provincias.

Si queremos cambiar la Justicia, no lo hacemos cambiando la Corte Suprema. A la Corte Suprema llega menos del uno por ciento de los ciudadanos. La justicia que regula la vida cotidiana de los ciudadanos, la justicia laboral, civil, penal, es la justicia de las provincias. No hay cambios posibles en la mejora de la Justicia, si no democratizamos y producimos una enorme transformación en los sistemas judiciales de las provincias.

Lo mismo ocurre con la salud. En las provincias argentinas, no hay un solo hospital que sea de la Nación. Si queremos avanzar en mejorar la situación sanitaria de nuestros pueblos, la desnutrición, la mortandad, etcétera, hay que avanzar también respecto de la política de salud, en pactos políticos institucionales entre la Nación y las provincias, que garanticen determinadas cuotas del gasto dirigidas a la salud, a la educación.

Hay parámetros que uno ve en varias provincias, fundamentalmente donde hay regímenes feudales, que son comunes. Hay un aumento enorme del gasto de la burocracia política y de la administración central. Cada día cuesta más mantener esos aparatos políticos y esos sistemas burocráticos. Hay una enorme caída de la inversión en salud y en educación y hay un enorme incremento del gasto social en clientelismo, bolsones y planes alimentarios.

La salud, la educación y la calidad de vida tienen que financiar cada vez con más recursos el mantenimiento de estos sistemas políticos, feudales, anacrónicos y de atraso en nuestros pueblos. Eso tenemos que cambiarlo, y no se cambia interviniendo cada provincia una vez que estalla una muerte. Nuestra tarea es transformar todo eso. Por supuesto, que esto lo puedo hablar institucionalmente, pidiendo una audiencia con el ministro del Interior, pero como senador, en este Senado y representando a mi estado provincial, hubiese querido que viniera el ministro del Interior, como en cualquier otra etapa institucional, para conversar sobre estos temas que van más allá de la intervención absolutamente justificada y sin lugar a dudas que tiene que salir hoy de acá, con mucha contundencia y con todos los poderes que debe tener el interventor federal.

Quiero aclarar otra cosa que mencionó el distinguido senador por la minoría de la provincia de Córdoba, en cuanto a que esta intervención no abarca a los municipios. Eso es cierto, pero debe quedar en claro que el interventor sí tiene facultades para intervenir los municipios, porque no está impedido para ello. Nosotros no estamos interviniendo los municipios, pero sí tiene facultad para ello el interventor porque tiene facultades absolutamente plenas.

No quiero extenderme demasiado en todo esto, pero creo que no vamos a solucionar estas situaciones y recurrentemente vamos a tratar el agravamiento de los estados provinciales si no se produce un serio pacto político e institucional entre la Nación y las provincias que tengan que ver con la jerarquización de las instituciones, con la democratización de la vida ciudadana y con la garantía de las políticas macro de salud y de educación. No alcanza con que desde cada Ministerio se envíe el cheque a los ministros de las provincias para atender la salud

y la educación. Cada día, los estados provinciales tienen más dinero; cada día ingresan más recursos en las provincias; la recaudación crece todos los días y cada vez hay gobiernos más ricos y pueblos más pobres.

En muchas provincias argentinas hay que atender la distribución del ingreso. No puede seguir habiendo progresivamente pueblos miserables, con sistemas políticos absolutamente ricos y que viven a costillas del dinero de la salud y de la calidad de vida de nuestra gente.

Termino diciendo que voy a apoyar absolutamente este proyecto de ley y, en su momento, desde las respectivas comisiones y a través de nuestra bancada impulsaremos la posibilidad de promover distintas políticas que atiendan a prevenir este tipo de hechos para que nunca más tengamos que intervenir a un estado provincial.

Me vino a la memoria el libro de José María Rosa sobre los comienzos del siglo XX, donde se hablaba de una figura que habían inventado los que eran por entonces asesores del presidente Yrigoyen: las intervenciones reparadoras. O sea, intervenían las provincias que habían ganado los conservadores y donde había perdido el radicalismo, obviamente sin participación del Congreso porque aquí estaban todos los conservadores. ¿Por qué se hacía eso? Tenía una justificación histórica: esos triunfos en aquellas provincias eran producto del fraude y no de una legitimidad democrática. Las provincias gobernadas por los conservadores eran producto del fraude. Entonces, lo que hacía el presidente, que tenía al Congreso y a las provincias con mayoría conservadora, era dictar la intervención por decreto. Pues bien, esos tiempos no existen más: el abuso del Estado federal respecto de los estados provinciales no existe más. Reitero: yo no recuerdo a un presidente que haya decidido una intervención y que haya tenido oposición en el Congreso, independientemente del signo político de que se trate. Pero es necesario avanzar en los temas de fondo que impidan que estemos votando el avasallamiento de las instituciones de la provincia que es remedio federal y sí, por supuesto, estoy convencido de que hay que poner las previsiones y los límites necesarios —estas serán las instrucciones que dará el Ministerio del Interior al futuro interventor— para que no les dejen las crías a los hermanos santiagueños, una vez que se vayan para que

en este caso, por lo menos, la intervención sirva para restablecer la legitimidad popular y para sanear las instituciones de la provincia, y que cuando se vaya el interventor la situación no sea peor que la que recibió.

Espero que esto suceda así y que las instrucciones del ministro sean en ese sentido.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Castillo.

Sr. Castillo. — Señor presidente: como representantes federales podríamos decir que sentimos cierta aflicción o tristeza por estar tratando un tema como éste.

Ya han pasado algunas horas del día 31. Estamos en la madrugada del 1º de abril. Pero casualmente un 31 de marzo —nada más que del año 1820— el comandante Juan Felipe Ibarra daba una batalla en la ciudad de Santiago del Estero mandando a los tucumanos a su provincia. A partir de ese momento se inicia un proceso que culmina el 27 de abril cuando se logra la autonomía de dicha provincia. A veces la historia nos pone en la ironía de ciertas fechas que en el caso de hoy hace que nos embargue la tristeza.

Si analizamos algunos números, observaremos que en los últimos 102 años han jurado en Santiago del Estero 63 gobernadores, lo que nos da un promedio de un gobernador cada 20 meses. Treinta de esas gobernaciones fueron por intervención federal o por golpes de Estado. Sólo ocho gobernadores electos terminaron su mandato y dentro de ellos, por supuesto, Carlos Arturo Juárez tuvo el privilegio de gobernar en tres oportunidades.

Pero esto que decimos de Santiago del Estero también se da en otras provincias, con cifras no muy distintas y circunstancias muy parecidas. Con estas palabras quiero rescatar la alta emotividad de las expresiones de los tres senadores por Santiago del Estero. Pude ver que ellos se manifestaron como hombres o mujeres representantes de su pueblo, más allá de su color político. Frente a circunstancias como las que estamos analizando, las cuestiones meramente sectarias quedan a un costado, ya que se trata nada más y nada menos que de la vida política de una provincia.

Es de destacar la aflicción con que el senador Mera relataba la situación de su provincia.

Y luego de escuchar a varios colegas pude concluir que en muchas provincias argentinas se dan las mismas circunstancias.

Pongo el diagnóstico muy brillante del senador Prades —cuestiones electorales, reelección *in eternum*, amañamiento de diversas cuestiones— y siempre, con el paso del tiempo vamos a tener un resultado de orden similar. Porque esto que hoy estamos analizando es la vieja historia de la propia humanidad. Desde que los hombres empezaron a conformar sociedades siempre hubo liderazgos, y a partir de que éstos empiezan a avanzar sobre ciertas individualidades, podemos llegar a la conclusión de que la historia de la humanidad es el avance y el retroceso de esos procesos. A partir que esa vida en sociedad empieza a tener ciertas demandas, precisa de las sofisticaciones, de las normas y de las instituciones que vayan haciendo los controles necesarios.

Creo que hoy podemos tratar esta norma sin ninguna duda, porque a partir de la reforma de 1994 esto queda como un estamento del Congreso de la Nación. Hacía recién referencia el señor senador por La Rioja a cuestiones de la historia. Como siempre, él tocando un poquito de oreja (*sonrisas*), pero es cierto aquello de las cuestiones reparadoras que se hacían por parte de don Hipólito. Lo cierto es que a partir del artículo 75, inciso 31), y sobre todo del 99, inciso 20), que fue puesto en el Núcleo de Coincidencias Básicas que se trató en la reforma constitucional de 1994, este tema queda prácticamente como hoy lo estamos tratando. Es decir que quizás sea la primera oportunidad, con la nueva reforma, en que estamos tratando este tema.

Estas cuestiones a las que se ha hecho referencia y, sobre todo, el planteo en el sentido de que no queremos estudiar las consecuencias sino las causas —así se ha puesto de manifiesto en las cuatro o cinco últimas intervenciones que hemos escuchado—, me parece que son lo fundamental de esta noche. Por cierto, estas situaciones se pueden ir dando y los argentinos, que somos tan imaginativos, siempre les encontramos la vuelta.

De hecho, de 1983 a la fecha —que podríamos denominar como la última parte de nuestra tan menecada democracia; como el volver a intentar reestructurarnos y tener por lo menos más

de veinte años de continuidad— nos encontramos por cierto con algunos déficit republicanos. Esto es propio de algunos temas que nosotros copiamos y llevamos adelante. Es el imperio de situaciones en las provincias que acá se han descrito muy bien. Por ejemplo, este uso y abuso de las reelecciones que en casi todas las Constituciones han ido dándose a partir del 83, a pesar de tener una Constitución de 1994 que a nivel nacional está planteando una Presidencia de ocho años, si al presidente le va bien y, si no, de cuatros; es decir, una reelección en el medio. Sin embargo, en muchas provincias, como diría Marcos Aguinis, hemos tratado de buscar la reelección indefinida para competir con la eternidad.

Un pensador austríaco —Popper— con alguna ironía dice que casualmente una de las bellezas del sistema democrático es que el pueblo puede sacar a los gobernantes en forma pacífica. Antes era a través de revueltas o directamente los mataban. Esa es una de las virtudes de la democracia. Entonces, si uno va “taponando”, frente a ello es lógico que en las sociedades, que siempre se desenvuelven y avanzan, llegue un momento en que esas tapas naturales surjan y se hagan escuchar a través de estas situaciones: a veces por muertes, como acá se planteó, y a veces de otra manera.

Creo entonces que los hombres y mujeres de la política debemos tratar de llevar adelante reformas que nos permitan no estar lamentándonos de estas situaciones. Debemos escuchar estos planteos, con el dolor que debe surgir sobre todo de quienes son senadores de la provincia cuya situación hoy estamos tratando.

El 6 de febrero de 2002, cuando la Argentina estaba en un momento muy difícil —en un proceso institucional con un gobierno de transición, con situaciones económicas hartamente difíciles, con una sociedad que había perdido en alguna medida una escala que debe respetar como sistema político— firmamos un acuerdo federal para la reforma del sistema político argentino. Los firmantes fueron, por ejemplo, los entonces senadores Miranda y Reutemann, el actual presidente de la República Néstor Kirchner, Aníbal Ibarra, etcétera. Es decir, todos quienes hoy en alguna medida tienen distintos cargos y son representantes legítimos de sus provincias y del pueblo argentino.

En ese documento nos comprometimos a realizar muchos cambios políticos, que son los que aquí se han planteado. Pero pareciera que los argentinos solamente actuamos ante el imperio de la necesidad; que luego de producido el diálogo político y de haber solicitado a la Iglesia que nos ayudara a solucionar los temas acuciantes de aquel entonces, nos olvidamos de esas cuestiones. Por ejemplo, de perfeccionar el sistema político argentino; de reducir sustancialmente la actual estructura de costos del sistema político del Estado nacional y de los estados provinciales y municipales; de lograr una mejor y mayor participación de la sociedad en los mecanismos de control en el ámbito público; y de algunos otros aspectos que figuraban en los acápites menores del documento.

Es decir, los caminos que nosotros mismos hemos estado llevando adelante están dados. Entonces, de acuerdo a lo escuchado de diversos señores senadores y teniendo en cuenta que quienes firman ese documento son los mismos que tienen responsabilidades políticas claras y reales, creo que es cuestión de abordar los temas.

En ese sentido, tomo las palabras del señor senador Yoma. O sea, este planteo no debe quedar como una expresión de mero voluntarismo, sino que hay que abordar ciertos temas, porque de lo contrario va a quedar sin resolver, como en un viejo cuento, qué es primero: si el huevo o la gallina.

En muchas estructuras provinciales hay sistemas amañados. Aquí se habló de clientelismo y de una serie de cuestiones al respecto. He sido gobernador y las conozco. He estado de un lado y del otro del mostrador, y antes de ser gobernador he sido opositor, durante muchos años. De manera que en muchas ocasiones se piensa que los atrasos en ciertos lugares forman parte de situaciones políticas perversas. Por su parte, quienes tienen un pensamiento economicista y liberal sostienen que cuando se deja abierta la situación al libre juego y a la evolución, esos nuevos sectores sociales son los que demandan mayores cambios y situaciones. No sé si esto puede ser aplicable a la provincia de Santa Fe, a la Capital Federal, o a otras provincias con un retraso mayor. Pero, en última instancia, ese debate no nos serviría.

Creo que en honor a lo que hoy estamos planteando y a la dolorosa situación de tener que intervenir una provincia hermana, deberíamos buscar con buena voluntad la resolución de esta cuestión por los canales políticos. Nosotros somos los que tenemos la posibilidad de llevarlo adelante. Para ello la gente nos ha elegido y quizás tengamos la tranquilidad espiritual para lograrlo.

Entiendo y participo de los temores que aquí se han planteado, del efecto cascada señalado por el señor senador Prades y de las expresiones de una colega de otra provincia. Nadie está ajeno a esas cuestiones. Pero en la medida en que tengamos normas objetivas que nos permitan ir saliendo de esta situación y no esperar más una crisis para que nos podamos volver a sentar a enfrentar las cosas, vamos a lograr estar mejor.

Creo que este país todavía está en un momento difícil. Hace muy poco tiempo hemos reorientado el camino político y tenemos un presidente elegido por el pueblo, con las debilidades propias de nuestra democracia, pero también con posibilidades ciertas de salir adelante. El proceso de desarrollo es difícil pero en este contexto mundial todos tenemos que trabajar.

El señor jefe de gabinete estuvo en este cuerpo hace pocos días y se refirió a cuestiones vinculadas, nada más ni nada menos, que con la deuda externa, y que esto implica poner a la Argentina dentro del mundo.

Creo que estamos viviendo ese momento. Es un proceso que va a llevar su tiempo. Quizá también sea un proceso en el que con mucha humildad y con gran trabajo, con voluntariedad, pero también con una visión de país, crecimiento y desarrollo podamos llevar adelante algunas cuestiones.

Hace pocos días he visto lo que ha ocurrido en Europa, sobre todo en España, como hacía referencia recién el senador por Santa Fe. La respuesta de Europa ha sido casi inmediata. Se está trabajando para que haya una especie de autoridad relativa al terrorismo. Es decir, más allá de los presidentes y de los Estados, en poco tiempo más Europa va a tener una autoridad. Y no me cabe la menor duda de que en poco tiempo más Europa también tendrá una autoridad política que esté por sobre los Estados. Hacia ello se encaminan. Es decir, vemos que en la

complejidad del mundo hay distintos modos de pensar y de aglutinarse. Creo que los argentinos debemos empezar a trabajar y a mirar en ese camino.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Giri.

Sra. Giri. — Señor presidente: me hubiera gustado comenzar mi exposición de un modo, pero voy a tener que empezar de otro modo.

El senador Yoma nos ha explicado abundantemente cuándo una intervención es legal y legítima. Como acá no está presente ni es senador el vicegobernador de mi provincia, que ha sido duramente cuestionado, me veo obligada a decirle al señor presidente que le acerque un diccionario al senador Zavallía, porque dijo que el licenciado Schiaretti detentaba el poder en Santiago del Estero. "Detentar" es ocupar un lugar de modo ilegítimo. Tal vez se confundió y quiso decir que ostentaba ese cargo.

No voy a abundar en detalles con respecto a la intervención de Schiaretti en Santiago del Estero, pero menos mal que el licenciado Schiaretti no tiene más de cien años, porque si no el senador Zavallía tal vez lo hubiera hecho cargo de todas las intervenciones que ha habido en esa provincia.

El tema puntual es la intervención al actual gobierno. Me hago eco del sentir, del dolor y de las emociones de los senadores de mi partido por Santiago del Estero. Me hago eco del dolor de mis hermanos santiagueños que hoy están divididos, unos a favor de una decisión y otros a favor de otra, pero no dudo de que en el medio de esa decisión estamos los políticos.

No coincido exactamente con la posición que sostiene que dentro de la democracia los sistemas sean malos de por sí. Los malos o buenos somos las personas que integramos esas instituciones.

No me duele Santiago del Estero. En realidad, me duele la Argentina. Al mismo tiempo, me enorgullece estar en este ámbito donde he aprendido muchísimo, donde he escuchado diferencias y donde todos de alguna manera, desde la tolerancia que nos impone el ejercicio de la democracia estamos quedando por afuera de nuestros partidos políticos y de nuestras propias internas dentro de los partidos políticos, para pensar como argentinos, como senadores representantes de nuestras provincias porque esa es nuestra obligación.

No dudo en absoluto de los porqués de esta decisión que ha tomado nuestro presidente y que hoy ha avalado la Cámara de Diputados y que seguramente vamos a avalar también en este Congreso.

Dios quiera y nos ilumine a todos para que sigamos caminando de tal modo que esto no se repita en ninguna provincia argentina y nunca más en Santiago del Estero, porque ya sobra abunda en esa provincia y en ese pueblo —no sé si decirlo— ese juego de las intervenciones. Hago mío el sentir —como dije— de los senadores de mi partido en Santiago del Estero que hoy abundaron con más detalles sobre todo lo sucedido en la reunión de nuestro bloque, y quisiera hacer hincapié en algo que no podemos soslayar desde ninguna perspectiva y es que se investigue la vida, la intimidad de miles de ciudadanos. No podemos permitir desde ningún punto de vista que el poder político que no debiera manejar y conducir al Poder Judicial, al Poder Legislativo ni a los escuchas de la policía se meta en la vida, en la intimidad y en la casa de tantos miles de santiagueños, porque acá no tiene nada que ver a qué partido político pertenecían, sino a quién apoyaban dentro de este gobierno que espero que en breve ya no conduzca más la provincia de Santiago del Estero.

En honor a la brevedad he dicho lo que siento, mucho de lo que siento y pienso ya lo han dicho acá senadores y senadoras y para quienes han planteado el temor de que esto se produzca en otras provincias argentinas, para eso estamos nosotros, los senadores, para defender un poder del Estado que es el Poder Legislativo y a través de él a nuestras respectivas provincias; y desde ya hago mías las palabras que después va a decir mi compañero por Córdoba, el senador Urquía.

Muchísimas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. — En primer lugar, adelanto mi voto afirmativo al proyecto de ley para intervenir a la provincia de Santiago del Estero y es una de las pocas veces que comparto los argumentos que dio el señor miembro informante, el senador Pichetto, respecto de los fundamentos de esta intervención.

Primero, quiero analizar dos cosas, una que se planteó acá, que es el sentido de la oportuni-

dad de la decisión; luego, dos temas propiamente institucionales y después deseo abordar un tema básicamente político.

Con respecto al tema de la oportunidad de la decisión, se planteó acá y también en el debate en la Cámara de Diputados, si no debió hacerse antes, si no se había esperado más de la cuenta.

En principio me parece razonable el tema de la oportunidad y que se haya planteado la vocación de que fueran las propias instituciones de la provincia las que intentaran saldar la grave crisis institucional que se vive allí.

Creo que se llegó hasta las últimas consecuencias. El gobierno envió comisiones que hicieron excelentes trabajos de investigación y recopilación de datos documentados. Habiéndose bloqueado, a través de la Legislatura y de los distintos poderes del Estado, la posibilidad de revertir la situación de crisis, creo que se llegó al remedio extremo, que es la intervención federal.

Nunca creí que la situación de Santiago del Estero pudiera resolverse a través de la intervención de uno sólo de los poderes. Creo que hay una trama muy compleja, una suerte —como acá se dijo— de poder feudal y me parece que podría ser sospechado, también, de una suerte de asociación con fines muy poco lícitos, que logró enquistarse en los tres poderes del Estado y utilizar, incluso, para sus propios fines a las fuerzas de seguridad policial.

Planteadas las cosas así, creo que es muy saludable la decisión que acá ya se ha fundamentado. Y no voy a continuar con los argumentos que todos han planteado y que están, además, debidamente acreditados en los informes que fuimos recibiendo de las comisiones.

Quiero tocar dos temas institucionales. Se dijo acá que el interventor tendría que adecuar sus funciones a los límites que establece la Constitución de Santiago del Estero. No comparto esta visión y la doctrina constitucional, en general, tampoco la avala.

Hoy, el diputado Vanossi, al hacer su intervención en la Cámara de Diputados, lo dijo específicamente. Las Constituciones provinciales no pueden limitar la función del interventor federal y, además, por esto no somos una confederación sino que somos un Estado federal. Y por eso existe la intervención federal.

Por su parte, el doctor Cassagne que, en su *Tratado de Derecho Administrativo*, también trabaja sobre este tema, al hablar de intervención federal; dice específicamente que las normas de las Constituciones provinciales que limitan las funciones de los interventores son de dudosa constitucionalidad.

Respecto de otro de los temas que se plantearon, vinculado a la forma de designación de los jueces –porque uno de los fundamentos es el sometimiento y la poca independencia del Poder Judicial–, abunda mucho y es muy específico el informe que hizo el Ministerio de Justicia. Pero con sólo ir a la página 7, en lo que hace al tema del Consejo de la Magistratura, en primer lugar hay que plantear que, si bien la designación de magistrados se hace por medio del Consejo de Magistratura, en la reforma constitucional –esto aparece en la página 7, reitero– se estableció como cláusula transitoria que, en la terna de postulantes para jueces, debían incluirse obligatoriamente los jueces en comisión, designados sin la intervención del Consejo de la Magistratura. Ello garantizará, entonces, la cantidad de los miembros del Poder Judicial nombrados anteriormente por el poder político.

En el '98, el Poder Legislativo de la provincia dictó la ley 6.432, en la que se omite, respecto de la selección de magistrados, la necesidad de que los aspirantes rindan un concurso por oposición. Se elige el procedimiento de concurso de antecedentes y una entrevista personal, secreta, con los miembros del Consejo. Y, luego, éste confecciona la terna de profesionales seleccionados conforme al sistema de la sana crítica. La resolución es irrecurrible, se adopta por simple mayoría sin que se asienten fundamentos ni consideraciones en acta, ni que se den a publicidad. Esto es una resolución del 96.

En cuanto al tema político que se vincula con esto, como se dijo, hay hechos gravísimos en la provincia de Santiago del Estero. Los conocíamos desde hace mucho. El primer punto es escuchar algunas intervenciones por las que tengo la impresión de que, a veces, parecemos paracaidistas. Todas las investigaciones que tenemos de Santiago del Estero datan de años. Hay casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay denuncias de las Madres del Dolor de hace muchísimos años, denuncias por torturas, desapariciones, casos de crímenes,

homicidios, donde la Justicia fue obstáculo precisamente para la investigación, todas las causas de espionaje político, de censura en la prensa y en los medios de comunicación. Son denuncias que conocemos desde hace muchísimos años, que han circulado prácticamente por todos los estamentos políticos institucionales. De esto hemos hablado mucho, muchas veces. La pregunta es cómo se llega a esto, por qué hoy nos encontramos discutiendo y, en todo caso, tomando los gravísimos crímenes –hemos escuchado temas del poder feudal–, por qué llegamos hoy a esto. ¿Qué pasó con nuestra dirigencia política? Porque, efectivamente, existieron los crímenes de La Dársena.

Ahora, esto no es ajeno a la crisis institucional, a la crisis política y a la crisis de los partidos políticos que afecta a la Argentina. Estas cosas no suceden en una provincia si no hay al menos una parte importante de la máxima dirigencia política responsable que ha mirado para otro lado o ha sido parte de estos procesos. Y claro, cuando se desmorona ese sistema, parece que todos empezamos a decir lo que antes no decíamos.

Recordé que el caudillo Juárez –como se le dijo aquí– fue en su momento senador nacional. Es decir, asumió cuando lo hicimos muchos de nosotros en diciembre de 2001. Pero a los pocos días presentó su renuncia. Entonces, fui a la versión taquigráfica de esa fecha para no ser hipócrita y recordar qué era lo que pasaba en la dirigencia política cuando el senador Juárez presentaba su renuncia.

El 21 de febrero de 2002 este Senado trató la renuncia del entonces senador Juárez, que cinco veces fue mandatario y que al parecer fue, efectivamente, uno de los grandes protagonistas de estos crímenes aberrantes.

Se trata la renuncia del señor senador por Santiago del Estero, Carlos Arturo Juárez, y toma la palabra la señora senadora Castro que dice: “Tomado conocimiento de su renuncia, el doctor Juárez quiere expresarles a través de mí su profunda emoción y sus disculpas por no estar presente hoy para hacerlo personalmente. El cariñoso saludo y abrazo permanente del doctor Juárez...”.

Luego, pide la palabra el señor senador Gioja, hoy gobernador de la provincia de San Juan, y dice: “...en nombre de nuestro bloque quiero manifestar que me parece de absoluta y total

justicia que antes de aceptar esta renuncia, que implica una decisión del doctor Juárez que por supuesto lamentamos, rindamos un más que sincero homenaje a su persona. Sin duda indica que lo han tenido como un protagonista principal, como un gran referente y, por sobre todas las cosas, pone de manifiesto la admiración del pueblo de su provincia que, cada vez que se presentó como candidato a gobernador, le hacía obtener los resultados que todos conocemos. Por eso, señor presidente, si bien creo que no hay más alternativa que aceptar esta renuncia, antes de hacerlo quería dejar rendido este homenaje a un grande del justicialismo y de la política argentina como es el doctor Carlos Juárez”.

Después toma la palabra el senador Cafiero que dice: “...no puedo menos que manifestar que me cuesta disimular mi emoción frente a esta actitud de un hombre a quien conozco desde hace más de cincuenta años como militante de la política y que es un ejemplo para la vida política de los argentinos”. Luego sigue diciendo: “Carlos Juárez fue elegido senador en los inicios del justicialismo y desde allí supo mantener enhiesta su calidad de hombre y de político”. Más adelante dice: “...me ha entristecido saber de su decisión de renunciar. Yo quisiera que un hombre de la calidad e historia de Juárez no se vaya tan fácilmente de nuestra institución. No sé si corresponde o no, pero yo le haría llegar un mensaje de sus colegas de este Senado pidiéndole que recapacite en su actitud, que vuelva a pensarlo. Carlos Juárez, por su historia y por todo lo que significa –sobre todo para el justicialismo–, no merece irse con un simple adiós”.

Y el presidente Maqueda, hoy integrante de la Corte Suprema, dice: “Quiero hacer saber al señor senador Cafiero que esta Presidencia y también el secretario parlamentario se han comunicado con el doctor Juárez en los términos que usted ha expresado. El doctor Juárez nos ha pedido por favor que en el día de la fecha le aceptemos la renuncia”.

Después habla el senador Zavalía, que dice: “A pesar de la diferencia de edad que tenemos, hemos logrado –sobre todo en los últimos tiempos– establecer una gran convivencia política, respetando el doctor Juárez mis años de joven luchador. Es cierto que hemos tenido duras discrepancias. Pero también es cierto que, más allá

de lo que mucha gente piensa, el doctor Juárez me ha demostrado a mí y a todos los santiaqueños que posee una gran vocación democrática y un gran respeto por las instituciones”. Y agrega: “...su participación en este recinto hubiera sido muy útil para este Senado y para la República, por su capacidad, por su inteligencia y por su experiencia. Por lo tanto, adhiero a lo manifestado y sugerido por el señor senador Cafiero, en el sentido de que exista la posibilidad de que se recapacite sobre esta decisión. Las razones que el doctor Juárez ha expuesto son muy fuertes y muy duras, pero creo que es importante que podamos hacer esta exhortación que ha sugerido el señor senador Cafiero”.

Finalmente, parece que Juárez insistió en su renuncia por motivos de salud. Se votó. El señor Cafiero pidió abstenerse, para no votar la renuncia de Juárez. O sea que parecía que Juárez era un patriota.

Digo estas cosas, de las cuales cada uno se hará cargo; de lo que pensó y de lo que dijo. Porque lo que sabemos de Santiago del Estero lo conocemos desde hace bastante. Y muchos nos hicimos cargo hace mucho.

Esto quiero plantearlo porque parece como en la época de la dictadura militar, cuando en el '83 y '84 algunos parecían enterarse de que había habido detenidos desaparecidos.

Mire, ¿sabe qué? Yo no sé si a Tota, en Berazategui, podía enterarse en el '84 que había habido detenidos-desaparecidos, secuestros, torturas y vejámenes. Pero los dirigentes políticos lo sabían todo. Y cada uno se hará cargo de lo que hizo y de lo que no hizo.

Ningún país llega a lo que llegó la Argentina el 19 y 20 de diciembre de 2001 si no es con un enorme deterioro de su sistema institucional, de su sistema político, de su dirigencia política y de los partidos políticos.

Por lo tanto, valoro expresiones que ha dicho el senador Yoma, que ha dicho Castillo. La cuestión es si nos hacemos cargo de esto en serio, y no cuando se cae y se desmorona el que estaba arriba, y entonces ahora digo lo que no dije durante años. Porque todas las denuncias de acá tienen algunas décadas, llegaron a organismos internacionales y recorrieron todos los estamentos políticos.

De acá ninguno de nosotros es paracaidista. Entonces, hacemos cargo de estas cosas impli-

ca sí, en serio, poder hacernos cargo —esto se dijo acá— de dar mejores instituciones, de mejorar la calidad democrática. Pero sin doble discurso y haciéndose cargo en serio.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Zavalia, por haber sido aludido.

Sr. Zavalia. — Sí, fui aludido. Es cierto lo que dice la senadora Ibarra. En esa oportunidad yo era intendente de la ciudad capital de Santiago. Estaba el gobierno de la Alianza, de presidente estaba el doctor Fernando de la Rúa. Como vicepresidente estaba "Chacho" Álvarez, por el Frepaso, y tenían la máxima autoridad política del país. Creo que la senadora por la Capital formaba parte del Frepaso. Y su hermano era, de la mano del doctor De la Rúa, intendente —o jefe de Gabinete— de la ciudad capital.

Es cierto que en esos dos años que estuve como intendente, entablamos con el doctor Juárez una buena relación institucional. Institucional, no política. Por eso es que, cuando lee mis palabras de aquel entonces, en que Juárez no podía asumir su senaduría, expresé que a pesar de la diferencia de edad o de generación, y de las diferencias —que tuve y que tengo—, guardaba un respeto.

Porque realmente hay que reconocer y que reconocerle, más allá de sus errores o de sus desaciertos, que ha sido un político importante en la vida de mi provincia, en la vida del justicialismo y en la vida del justicialismo a nivel nacional.

Entonces le pido a la señora Ibarra que estas cosas las sepa interpretar en el nivel de las circunstancias políticas, no en las chicanas políticas ni en la bajezas políticas. Y que, incluso, a ella misma la involucran de pies y manos.

Así que, senadora Ibarra, yo le pido que recuerde su trayectoria por la Alianza, con De la Rúa. ¿Tú también Brutus, me niegas?

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Urquía.

Sr. Urquía. — Señor presidente: seré muy breve. Estamos tratando en este recinto un proyecto de ley trascendente. Quiero rescatar la celeridad con que el Congreso de la Nación —la Cámara de Diputados y seguramente el Senado— le han dado respuesta al Poder Ejecutivo en un proyecto que, indudablemente, no puede esperar. Cualquier dilación que imponíamos al

proyecto de intervención a Santiago de Estero puede costarles muy caro a los habitantes de esa provincia.

Por eso, queremos aprovechar para decir que vamos a apoyar, en general y en particular, este proyecto.

Pero queremos, también, rescatar algo desde el punto de vista de la sociedad de esa provincia. Escucho por ahí a muchos colegas hablar de la pobreza de Santiago del Estero. Los que tenemos la posibilidad de recorrerla cotidianamente, sabemos que Santiago del Estero no es la provincia de quince o veinte años atrás. Sólo basta visitar Bandera, Palo Negro, Tomás Young, Quimili, Tintina, Sachayoj para ver que es una provincia con una actividad que seguramente muchos de ustedes desconocen.

Desde el punto de vista del producto bruto geográfico, Santiago del Estero ha sido una de las provincias que en los últimos siete años han crecido mucho, fruto de la actividad agropecuaria. Ustedes conocen muy bien que este *boom* de los granos se lo debemos —entre otras cosas— a las provincias de Salta, La Pampa, Chaco y, fundamentalmente, Santiago del Estero, con casi un millón de hectáreas.

Entonces, el problema de esa provincia no es económico-financiero. Es un problema de la dirigencia. Si nosotros pensamos que una provincia, a través de su historia, soportó catorce intervenciones federales, tenemos que reflexionar porque algo pasa en esa sociedad. Lógicamente esa sociedad tiene algún problema serio. ¿Qué provincia argentina soportó en su historia catorce intervenciones federales?

Con toda humildad y respeto, señor presidente, les quiero pedir a los queridos compañeros senadores de esa provincia que hagan una autocrítica. Porque, finalmente, este problema de la intervención lo soportamos todas las provincias argentinas. Me parece muy bien ser solidarios en este momento. Pero, de una vez por todas, Santiago del Estero, a través de sus dirigentes, tiene que empezar a caminar.

Estamos tratando la intervención federal a un gobierno elegido por el pueblo. No fue un gobierno impuesto. Hemos escuchado aquí algunas alabanzas, incluso, a los dirigentes que hoy vamos a pedir que se retiren del gobierno para darle paso a una intervención, que me parece muy justificada.

Pero, indudablemente, creemos que es el momento y la oportunidad para pedirle a la sociedad santiagueña que se ponga de acuerdo, que deje a un lado diferencias sustanciales y que se ponga a construir.

Realmente, cuando uno analiza la historia, es una provincia con muchas potencialidades. Seguramente, la distribución de la riqueza está muy mal realizada. Pero es un problema de la clase dirigente de esa provincia.

Nos parece que el señor interventor que nombra el Ejecutivo nacional tiene que ir, fundamentalmente, con la función de crear las condiciones necesarias para que dentro de los 180 o de los 360 días, la ciudadanía democráticamente pueda volver a reconstituir sus instituciones.

He escuchado aquí a algunos colegas que hablaban de alargamiento de plazos de intervención, incluso de hacer algunas reformas a una Constitución que es patrimonio exclusivo de los santiagueños. Estoy convencido de que este país necesita una reforma política, como algunos de ustedes dijeron, de los sistemas de elecciones en cada provincia. Pero cuando lo encaremos tengamos cuidado: debemos encararlo a nivel país y no en una única provincia y en este momento.

Reitero que creo que la función principal de la intervención debe ser recrear las condiciones necesarias para que el pueblo santiagueño se autodetermine a través del voto directo. Por ello, los senadores del justicialismo por Córdoba pensamos que la justificación fundamental de esta intervención son los hechos aberrantes que han aparecido en los últimos días, a través del descubrimiento de miles de carpetas sobre ciudadanos de toda la provincia que eran seguidos y espionados por la inteligencia santiagueña. Nosotros creemos que, fundamentalmente, ése es el detonante que hoy va a hacer que en nuestro caso en particular apoyemos en general y en particular el proyecto de intervención federal a Santiago del Estero. No queremos que esos métodos aberrantes se vuelvan a aplicar ni en Santiago del Estero ni en nuestra querida Argentina.

También creemos que es de fundamental importancia tener en cuenta ciertas actitudes como la de no permitir a la oposición expresarse libremente y, lo que es peor, que se persiga o se discrimine a todo aquel que se manifiesta en contra del gobierno de Santiago del Estero.

Sr. Presidente. – Señor senador Urquía: el señor senador Massoni le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Urquía. – Sí, con todo gusto.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Massoni.

Sr. Massoni. – Cuando estamos a un paso del tratamiento de una nueva ley de coparticipación federal, creo que debemos resaltar que los productos brutos internos geográficos y per capital definen claramente las necesidades del interior y de las principales provincias del país.

En función de ello, cuatro provincias pueden designar al presidente de la República. Cuatro provincias son los titulares del producto bruto interno del país. Esa concentración no es lógica y lo que se da como producto bruto interno para la Capital Federal no se corresponde con lo que percibe su pueblo. Aclaro que estoy tomando a la Capital como un ejemplo. Evidentemente, se trata de un grupo de capitales extranjeros y nacionales que se apropian de lo que es del interior.

Señalo esto porque creo que no puede ignorarse la realidad.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. – Simplemente, es para aportar un dato histórico sobre un elemento que introdujo en el debate el señor senador Urquía. En realidad, Santiago del Estero no es la provincia más castigada por las intervenciones federales, sino Corrientes, que a lo largo de la historia ha soportado diecisiete intervenciones federales. De ellas, sólo tres se hicieron por ley, mientras que catorce se concretaron por decreto.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Urquía.

Sr. Urquía. – Agradezco al señor senador Yoma. En verdad, esta noche he aprendido que el récord lo tienen los correntinos y no los santiagueños. No obstante, debemos coincidir en algo: indudablemente, catorce intervenciones federales es una cifra que a todos nos asombra.

Yo no quiero extenderme demasiado más en mi exposición. Simplemente, quería hacer estas reflexiones y decirles que para nosotros, los senadores cordobeses, los hechos que acabo de mencionar son los determinantes que nos hacen apoyar en general y en particular el pro-

yecto de ley que estamos tratando. Desde ya, rogamos que sea para bien de todo el pueblo santiagueño.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Colombo.

Sra. Colombo. — Señor presidente: sin lugar a dudas, la senadora por la Capital Federal ha planteado de manera descarnada las profundas contradicciones que tiene la dirigencia política argentina. Y debemos hacernos cargo también de la necesidad de promover una profunda renovación de las prácticas políticas que permita reconciliar a la política con la sociedad.

Creo que lo que acaba de decir la senadora plantea necesariamente —además de la necesidad de recrear y profundizar las reformas que hacen a la mejora de la calidad institucional de los poderes del gobierno federal— el cumplimiento de los compromisos asumidos por los gobernadores argentinos, a través de los cuales se hacían responsables de promover hacia el interior de sus jurisdicciones estos cambios y reformas políticas que, evidentemente, en muchas jurisdicciones argentinas no se produjeron.

Es por ello que hoy nos encontramos en esta Cámara legislativa federal frente a la decisión de apoyar un proyecto de ley de intervención federal a una provincia fundadora de la Nación como Santiago del Estero, por la incapacidad manifiesta de sus gobernantes de garantizar la vigencia del estado de derecho y del principio republicano de división de poderes del Estado, y el funcionamiento del servicio de justicia.

La inacción del Poder Legislativo santiagueño fue incapaz de producir una salida a esta crisis en el marco de las herramientas que la Constitución provincial debe poner a disposición del Poder Legislativo provincial para hacer frente a estas circunstancias.

Pero creo que como bien se señaló aquí, existe en esta provincia un sistema electoral que permitió la consolidación de un poder dictatorial que coartó la posibilidad de que la oposición tenga representación proporcional a su cuantía en las cámaras legislativas.

Por eso considero que a partir de esta decisión conviene hablar más del futuro que del pasado. Ahora aparece la responsabilidad sustantiva del Poder Ejecutivo nacional al momento de designar a quien desempeñará el rol de in-

terventor federal de Santiago del Estero y al equipo que lo acompañará para restablecer rápidamente el funcionamiento de las instituciones. Además, ellos tendrán la responsabilidad de promover los cambios institucionales y las reformas políticas que hagan falta para realmente garantizar un mecanismo de selección de jueces que asegure la independencia de la Justicia, y un sistema electoral que permita que el Poder Legislativo sea un reflejo del pluralismo que sin lugar a dudas debe existir en la sociedad, y que se encuentra sofocado por estas reglas electorales que, como dijimos, coartan las posibilidades de las minorías.

Con una elección —que tarde o temprano deberá convocarse— no se resolverá la situación de Santiago del Estero si antes no se resuelven las cuestiones de previo y especial pronunciamiento.

Provengo de una provincia que fue intervenida en 1991 como resultado de un movimiento social surgido por el asesinato de una joven cuyo esclarecimiento, en lugar de hallar los canales pertinentes en las fuerzas de seguridad —y fundamentalmente en el Poder Judicial de la provincia—, encontró obstáculos.

A partir de ese movimiento social surgió la fuerza política que representamos. Y no sería leal a esta banca en la que estoy sentada si no recordara esa historia y si no recordara también que a partir de ese movimiento social este Frente Cívico y Social que representamos, “trasvasando” las estructuras políticas corporativas tradicionales, intentó sumar los esfuerzos de distintos sectores políticos para generar una fuerza que gobierna Catamarca desde hace doce años, pero que ha sido capaz de construir trabajosamente mejoras institucionales como las que señalaba acá el ex gobernador de Catamarca, doctor Oscar Castillo, mi compañero de bloque.

Oscar Castillo renunció a la posibilidad de ser reelegido. Promovió una consulta popular para que el pueblo de Catamarca dijera si quería la reelección del gobernador o no. También promovió una reforma constitucional para abordar otros aspectos que hacen a la mejora de la calidad institucional.

Entonces, realmente creo que estas mismas luchas y banderas que trabajosamente enarbolamos en Catamarca, con errores y con acier-

tos, es lo que deseamos los catamarqueños para el pueblo santiagueño. Son estas mismas banderas que enarbolamos desde hace más de una década las que hoy nos han hecho apoyar muchas políticas del Poder Ejecutivo nacional, que apuntan a mejorar la calidad institucional en nuestro país.

Sin embargo, con relación a la responsabilidad que le cabe a quien va a ejercer el cargo de interventor federal en Santiago del Estero, yo quisiera advertir que él debe tener en cuenta que en esta provincia, al intervenir los tres poderes del Estado, esta decisión afecta no sólo al oficialismo sino también a la oposición, que prácticamente y en buena ley puede haber ganado espacios institucionales que quizá pierda. Entonces, éstas son todas cuestiones que deberán ser consideradas y puestas en juego, para poder reconstruir las instituciones de Santiago del Estero.

Finalmente, diría que ésta es una decisión francamente dolorosa para todos, porque intervenir una provincia equivale a perder la libertad y a decir que alguien tiene que venir de afuera a resolver los problemas que los gobiernos provinciales fueron incapaces de resolver. Por tal motivo, la tarea del interventor deberá ser guiada por objetivos superiores y no subalternos.

No quisiera usar los términos que utilizó el senador por la minoría por la provincia de La Rioja, pero ya no hay margen, porque hay un fuerte límite y control social para impedir que desde una intervención federal se quiera hacer lo que todos esperamos que no se lleve a cabo.

Reiteramos: vamos a tomar esta decisión. Vamos a apoyar al Poder Ejecutivo nacional. Pero no podemos dejar de advertir sobre lo importante que es incorporar a la agenda de temas a tratar en este Senado la necesidad de profundizar y de avanzar en las reformas políticas, que muchas provincias argentinas están requiriendo, a efectos de que realmente vivamos en una democracia constitucional.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Cristina Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: no es fácil en un cuerpo como este, de netas características federales, decidir la intervención de una provincia. Tampoco es fácil para quien como yo y como tantos otros hemos defendido con mucha convicción las posiciones

federales y las autonomías provinciales ante lo que muchas veces considerábamos un abuso del poder central.

Tampoco fue fácil para el presidente de la República haber firmado el proyecto de intervención, porque más allá de su carácter de presidente de todos los argentinos, él es un provinciano que también defendió, siempre con mucha convicción y en algunas oportunidades con vehemencia, las autonomías provinciales.

Como legisladora nacional es la segunda vez que me toca votar un proyecto de intervención federal. La primera fue junto a otros integrantes de este cuerpo, quienes en ese entonces éramos diputados nacionales y votamos la intervención de la provincia de Corrientes, poco tiempo después de haber asumido la Presidencia de la Nación el doctor Fernando de la Rúa y luego de los sucesos sangrientos que provocaron la muerte de dos correntinos en un puente.

Por lo tanto, valga esta primera puesta en claro acerca de lo difícil que resulta para un cuerpo federal y para hombres y mujeres con profunda convicción federal firmar o votar a favor de un proyecto de intervención a de una provincia.

Respecto de la cuestión concreta en tratamiento, escuché que para muchos senadores los problemas que motivan la intervención de la provincia de Santiago del Estero radican en el sistema electoral o en el eventual ejercicio de las mayorías.

También he escuchado que todos se han referido a los problemas de las provincias, como si los inconvenientes del sistema político de la Argentina fueran único y exclusivo patrimonio de ellas.

Personalmente considero, al igual que otros señores senadores que se han expresado con anterioridad, que más allá de las características muy especiales que tiene el proceso político que se ha desencadenado en la provincia de Santiago del Estero, estamos en definitiva ante la crisis tantas veces comentada pero tan pocas veces abordada política y legislativamente del sistema político argentino.

Formalmente, la República Argentina tiene un sistema de partidos políticos. Pero en realidad, hoy concretamente somos apenas un montón de siglas partidarias, con burocracias políticas enquistadas en ellas. A su vez, esta crisis de

representación del sistema político se une a una fenomenal crisis social y económica. Entonces, el cóctel es explosivo. La regresión en la distribución del ingreso —no solamente en lo social sino también en lo geográfico— va perfilando realidades, que muchas veces desde la Capital Federal resultan incomprensibles e indescifrables. Es que es muy difícil para alguien que vive en una gran urbe y tiene una cultura muy urbana, entender cómo funcionan sociedades que se han cristalizado económica y socialmente y que no conocen otra forma de funcionamiento.

De todos modos, no voy a poner únicamente en cabeza de la crisis del sistema político la responsabilidad sobre estas cuestiones, porque creo que ello sería reduccionista. Me parece que sería trampoline sostener que por una sola causa —y enumerarla así como una única verdad sacrosanta que origina esta crisis— se llega a esta situación porque para su desarrollo se juntan un montón de cosas.

Y cuando hablamos de crisis, de obsolescencia del sistema político argentino y de los caciques provinciales, ¿qué tal si empezamos a hablar de los caciques de los grandes partidos nacionales, por ejemplo? Es decir, ¿por casa cómo andamos? ¿Es un problema de las provincias únicamente el anquilosamiento de sus dirigencias y la permanencia *sine die* de los dirigentes durante años al frente o al menos dirigiendo los partidos políticos?

Me parece que es un problema un poco más profundo, independientemente de que creo que hay sociedades que tienen particularidades que las hacen distintivas del resto, lo cual puede agregar un condimento más al problema.

Por eso, me parece un ejercicio de reduccionismo asignar a una sola causa la crisis que hoy puede vivir Santiago del Estero, más allá de que allí adquirió relevancia hasta por improntas personales, porque en definitiva el sistema político también lo protagonizan hombres y mujeres de carne y hueso, que en el caso de Santiago del Estero adquiere incluso ribetes tragicómicos, casi de grotesco.

En definitiva, esta suerte de permanencia *sine die*, este aferrarse al poder de cualquier manera y a cualquier costo, este quiebre entre legalidad y legitimidad que se va dando permanentemente, no es solamente en Santiago del Estero, sino que lo hemos vivido y lo vivimos dolorosamente en el ámbito nacional.

Por eso, cuando en alguna oportunidad una senadora hizo referencia a esto, desde nuestra Comisión de Asuntos Constitucionales impulsamos reformas del sistema político, como internas abiertas simultáneas para todos los partidos, apertura de los partidos políticos y contralor de la sociedad, y tantísimas otras reformas. No es que lo hicimos diciendo que teníamos la receta mágica para resolver los problemas políticos. Es un aporte más a la solución de la crisis.

Pero también hay que saber y asumir, como lo he dicho en reiteradas oportunidades, que los dirigentes políticos no bajan de platos voladores, no se depositan graciosamente en las provincias, en la Nación, en el Congreso Nacional o en los congresos provinciales, sino que en cierta medida representan a la media de las sociedades en las que somos electos. Obviamente, estamos hablando de gobiernos elegidos bajo sistemas democráticos. En consecuencia, la apelación o interpelación debe ser sí, en primer lugar, a los representantes del sistema político, porque de nosotros debe venir la ejemplaridad y la iniciativa política para modificarnos, pero además una interpelación a la sociedad.

Los Juárez, por así decirlo, brutalmente, no llegaron ahí por un golpe de Estado ni fueron impuestos por nadie, sino que fueron elegidos por una parte bastante considerable de la sociedad santiagueña.

Por eso digo con mucha humildad, sin querer tener la verdad revelada, que las causas son múltiples y complejas. Por lo tanto, el abordaje de este problema es múltiple y complejo también.

Es cierto que las intervenciones federales no han tenido buena historia en la República Argentina. He escuchado el otro día por los medios de comunicación a integrantes de la sociedad santiagueña referirse a las anteriores intervenciones. Y esto no sólo se dio en el caso de Santiago del Estero; pasó en Corrientes. En síntesis, las intervenciones no han sido buenas fundamentalmente porque muchas veces han sido tomadas casi como botines partidarios, como que el derecho a intervenir significaba que el partido gobernante tenía que apoderarse de esa provincia porque le correspondía a su partido y, entonces, de esa manera se aseguraba la continuidad del partido. Este es por lo menos el diagnóstico que tengo de muchas intervenciones que se han llevado a cabo.

Estoy absolutamente segura y convencida de que ése no va a ser el talante de la intervención que va a disponer el Poder Ejecutivo. Primero, porque estamos absolutamente convencidos de que es necesario que quienes asumen responsabilidades en un momento tan difícil no solamente tengan el mérito de una ficha de afiliación. Creemos que, dados los problemas que tiene hoy este caso de Santiago del Estero, se requiere además una impronta que tenga que ver con un fuerte compromiso con los valores de justicia, seguridad y garantía de los derechos ciudadanos.

En consecuencia, con mucha... no diría preocupación pero sí dolorosa responsabilidad hoy voy a votar, y por segunda vez, la intervención de un estado provincial, al igual que otros legisladores. Pero sí creo que es necesario que no caractericemos esto como un problema de las provincias o de alguna provincia. Estamos ante un grave problema del sistema político argentino, cuya obsolescencia es un dato que no se puede ignorar. Explotó en 2001 y me parece que si no abordamos, con esta complejidad y comprensión de la que hablaba la solución del problema –por lo menos debemos intentar dar una respuesta desde las instituciones–, vamos a tener severos problemas, y no ya en una provincia sino que vamos a seguir teniendo severos problemas en la representación, en la intermediación entre ciudadanía y dirigencia, que es en definitiva el rol que la Constitución le asigna a los partidos políticos, porque después de todo estamos sentados aquí no solamente en nombre de las provincias argentinas sino de los partidos políticos.

Por eso, haciéndome eco de lo que manifestaron varios señores senadores y senadoras, impulsemos en serio una reforma del sistema político argentino; y si logramos mejorar esto y le podemos agregar además la mejora en la distribución del ingreso geográfico y social estaremos haciendo un aporte interesante al mejorar la calidad que estoy segura todos perseguimos.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Losada.

Sr. Losada. – Señor presidente: considero que todos tenemos un sentimiento común, a ninguno de los que estamos sentados en esta banca nos gusta tomar la decisión que significa nada más y nada menos reemplazar a un gobierno

que con sus cuestionamientos, con su comportamiento, con su renuncia, venía siguiendo un proceso de la voluntad política del pueblo de Santiago del Estero.

Digo esto, porque cuando uno escribe con total convicción el respeto a la voluntad popular está convencido de que no hay voluntad popular a medias, se cree o no se cree. Como decía alguien, no hay medio embarazado. Pero llegamos a esta desgraciada y dolorosa circunstancia, que no es un episodio que de golpe y trasnochadamente lo estamos abordando; desgraciadamente se trata de un vieja historia. Hace doce o trece años nos tocó compartir con la dirigencia del radicalismo de Santiago del Estero la frustración de un proceso electoral, en el cual se habían hecho denuncias absolutamente mostrables sobre cómo se había frustrado la voluntad popular de esa provincia.

Vimos marchas multitudinarias de una sociedad que reclamaba la legitimidad de su voluntad popular, pero en definitiva ese esfuerzo, esa lucha del pueblo santiagueño, terminó desgraciadamente con el cansancio y los venció la perseverancia –entre comillas–, de quienes desean el poder a cualquier costa.

Y hoy tenemos las consecuencias, no hay casualidades. Este no es un episodio del cual nos enteramos de un día para el otro. En última instancia, esto que estamos tratando hoy era un hecho objetivo de mucho tiempo. Lo que sí nos sorprende es que desde las más altas esferas, desde el poder político del Ministerio del Interior hasta hace quince días, esto que era conocido por toda la sociedad argentina, era negado por el ministro del Interior. Por eso es que nos hubiera gustado que se nos informara de esta vuelta de campana en una decisión de esta naturaleza, ya que quien está firmando la intervención, hasta hace quince días, en debates televisivos, negaba enfáticamente las razones para proceder de tal manera, porque la intervención significa la interrupción del gobierno de una provincia.

Los que históricamente defendimos las autonomías provinciales e hicimos siempre –y comparto– lo que recién se expresaba, el cuestionamiento al poder central que nos mira como si fuéramos objetos extraños a su estrategia política, nos rebelamos cuando un episodio de esta

naturaleza muestra descarnadamente el fracaso del esfuerzo de los pueblos del interior para ejercer en plenitud su poder democrático.

Hay tantos interrogantes y dudas. Inclusive, cada uno arriesga una razón. Yo no creo que haya una sola causa; nunca hay una sola causa sino una sumatoria de ellas que van acumulándose para que se llegue a este tipo de decisiones.

Y voy a reiterar el reclamo de la presencia del ministro del Interior, que alguna vez en su agenda y en su hoja de ruta debe tener la visita a este Congreso.

Me parece que no es un tema menor el que estamos debatiendo hoy, como para que no venga a explicar y explicitar personalmente lo que todos suponemos que son las razones. Por supuesto, adelanto que nuestro bloque va a votar afirmativamente. Pero hubiéramos querido que nos dieran los elementos más puntuales, cuya información tienen, y desde ya con mayor precisión, quienes están tomando este tipo de decisiones. Nosotros tenemos la intuición política, el olfato político —como se dice—, la información que nos dan nuestros dirigentes de la provincia, pero qué bueno hubiera sido que se actuara de la manera en que históricamente se lo hizo en este Congreso. Por las intervenciones que se produjeron en el pasado, vinieron los ministros del área política a explicar sus razones. Pero eso no ocurrió. Una vez más, no ocurrió. Sin embargo, independientemente de ello, nosotros vamos a votar favorablemente el proyecto, porque somos conscientes de que se agotó un modelo de conducción que daña mucho la imagen de la política.

Creo que no solamente estamos tomando una decisión, ya que de ser exclusivamente así, estaría renga, porque si después de adoptarla volviéramos a hacer lo mismo, sería como no haber aprendido la lección.

Se requiere la tarea docente para ver si hacemos las modificaciones correspondientes. Y comparto la necesidad de un debate político con mayúsculas, entendiendo que los más responsables son los partidos políticos, aunque hasta ahora no veo otro mecanismo de representación democrática en la Argentina, que los mismos partidos.

La intermediación con la sociedad la deben hacer los partidos políticos, a los que por supuesto tenemos que cuestionar y también

cuestionarnos, porque ninguno de los que estamos sentados aquí venimos de un repollo sino que provenimos de la historia de nuestros partidos políticos, de los que nos tenemos que hacer cargo, con sus virtudes y sus defectos.

Con un simple voto no podemos decir que aquí no pasó nada. Ha pasado y pasa mucho. Y también nos tenemos que sentir doloridos y frustrados al ver que la presencia política en una provincia debe ser intervenida por el fracaso de su ejercicio.

Yo me pongo en el lugar de los santiagueños. Hace muchos años a los misioneros nos tocó ver cuando desembarcaban los que en aquella época llamábamos paracaidistas, porque aparecían como en paracaídas, que venían a gobernar a nuestra provincia.

Esperamos también que quien sea designado para el cargo de interventor, vaya con toda la voluntad para procurar una concepción pluralista de la sociedad que les va a tocar conducir por obra —nos guste o no decirlo— del dedo. Sepan que van producto del dedo y por tal razón tienen más obligaciones que nadie para conducir con ecuanimidad y buscar la salida popular y democrática más rápida posible. Y así como estamos cuestionando el botín de un grupo o de un proyecto familiar, tampoco ese botín debe ser de un interventor.

Hay que trabajar para que esta decisión que tomamos hoy sea buena. Nunca son buenas del todo este tipo de medidas. Pero ya que la debemos tomar —y es tan doloroso hacerlo— tenemos que ayudar para que este proceso tenga, salida que todos deseamos: que el pueblo santiagueño pueda votar nuevamente, porque esa es la regla de oro de los que creemos en el sistema democrático.

Por eso, señor presidente, estimados colegas, insisto en que vamos a votar favorablemente esta decisión que ya ha tomado la Cámara de Diputados haciendo algunas observaciones en particular.

Finalizo diciendo que con el dolor en el alma de hombres y mujeres del interior estamos tomando una medida muy dura para nuestro orgullo provinciano.

Sr. Presidente. — Para cerrar la conferencia, tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: estamos llegando al final de este debate importante en donde

el Senado, además, ha demostrado una actitud de gran responsabilidad al afrontarlo con rapidez. Hubiera sido un verdadero desatino tomarlos más tiempo para evaluar esta situación, porque se abrían graves riesgos para la sociedad santiagueña.

Lo primero que quiero decir es que en lo personal no tengo dolor, tal vez porque no soy demasiado sentimental. En realidad, estamos haciendo lo que se debe. El dolor lo siente el pueblo de Santiago del Estero que está sin rumbo, con un gobierno imprevisible, con altas cuotas de irracionalidad y con crímenes sin resolver: dos chicas fueron brutalmente asesinadas, han pasado como cinco jueces y todavía no se sabe nada. Un diputado provincial —un tal “Pololo”— era el jefe de la patota. Es una muestra de decadencia brutal, un proceso cultural complejo, con gobernantes que son de otro tiempo. Indudablemente, estamos en presencia de un hombre como Carlos Arturo Juárez, que tiene 87 años. Un anciano. Creo que le debe costar mucho, durante el tiempo que está activo, tener toda la visión de la problemática de la provincia. Me parece que es muy difícil a esa edad sobrevivir política y físicamente en el poder por casi 50 años. Y su señora esposa también ha demostrado que no tiene aptitudes para gobernar la provincia, porque el verdadero proceso de descomposición empieza con ella —tenemos que decirlo— independientemente de que subsisten algunas causas que se venían prolongando en el tiempo. Esta estructura de Gestapo que investigaba a los políticos, a las personas, y que ahora se puso al descubierto, tal vez venía de mucho antes.

Pero la falta de conducción, de gobernabilidad... ¿Cómo puede ser que el gobernador diga que había ganado las elecciones? A los veinte días parece que en algún prostíbulo o no sé en qué lugar lo encontraron o qué cosa le imputaron y lo obligaron a renunciar. Se trató de un crimen que había ocurrido en un prostíbulo. Me corrijo. Y lo obligaron a renunciar. Y al vicegobernador también. Lo dijo el senador Mera, por Santiago del Estero. Al vicegobernador, como era una sombra peligrosa, también le dijeron que renuncie. Porque sí no, le iban a involucrar al hijo.

De modo que las causales son profundas. Cruzan el Poder Judicial, un Poder Judicial de-

pendiente —esto ya lo dije en mi primera intervención—; una Policía que está al servicio del régimen, que presiona, que aprieta; incluso, hasta se pudieron comprobar torturas. Esto está denunciado en el informe que han hecho los funcionarios del Ministerio de Justicia cuando visitaron Santiago del Estero.

Así que a mí no me duele nada. Creo que estamos haciendo lo correcto. Lo estamos haciendo en tiempo y en forma, rápidamente, para que mañana el presidente designe al funcionario.

El presidente tiene una definición, un perfil técnico: tiene que dismantelar la estructura cuasimafiosa que funcionaba en Santiago del Estero; tiene que propiciar un cambio profundo en el Poder Judicial de Santiago del Estero; tiene que poner a los jueces a trabajar en la investigación de los hechos criminales, en la búsqueda de la verdad, y deben hacerlo con un sentido imparcial, como tienen que ser los jueces.

Creo que la decisión del presidente va a ser muy acertada. Además, se trata de un planteo de intervención corta, para preparar a la provincia de manera que, nuevamente, a través del voto, pueda elegir a sus gobernantes.

Acá se ha dicho que el ministro del Interior cambió de opinión. En realidad, el ministro del Interior conforma también la estrategia de la paciencia, elaborada por el presidente; una paciencia que apuntaba, fundamentalmente, a la búsqueda de la salida de la grave crisis que vivía Santiago, desde la propia provincia de Santiago del Estero; desde los propios dirigentes políticos y legisladores, que tendrían que haber resuelto el tema iniciando el juicio político, destituyendo a la gobernadora y provocando un verdadero proceso de saneamiento, también en la propia Legislatura, porque había doce pedidos de desafuero de esos legisladores que estaban involucrados en causas como la de la ANSeS y también en hechos violentos, como en el caso del ingreso al domicilio del actual diputado Figueroa, ex senador nacional.

El presidente esperó y esperó, pero esta solución no se dio desde la provincia, dado que no hubo capacidad. Y fíjense cómo operaba el miedo en esa provincia. Hace cerca de sesenta días —menos, cuarenta y cinco días— vinieron en un colectivo alrededor de treinta y cinco legisladores a pedirles al jefe de Gabinete y al ministro del Interior que dejaran a la señora “Nina” Arago-

nés de Juárez como gobernadora, que el gobierno no se metiera... Hablaban loas de la gobernadora, en una palabra. Dicen que en horas de la tarde de hoy estaban intentando juntarse para destituir la. En realidad, no estaban capacitados para resolver el problema, no lo pudieron hacer.

Indudablemente, no había más tiempo en Santiago del Estero. Creo que había graves riesgos de que ocurriera un crimen político en esa provincia, hechos de sangre, graves situaciones de violencia que iban a provocar un gran perjuicio, y la detección, además, de las pruebas contundentes y demoledoras de un aparato de inteligencia que funcionaba de manera totalmente ilegítima y que violentaba la garantía y la libertad individual de cada uno de los santiagueños.

Corroborados estos temas, el presidente—porque acá, el que decide la intervención es el presidente de la Nación—envía el proyecto de intervención a las cámaras.

Creo, señores senadores y señor presidente de la Cámara, que estamos haciendo lo que corresponde. Creo que actuamos con responsabilidad procediendo a intervenir la provincia de Santiago del Estero, abriendo un nuevo camino para que el pueblo santiagueño en el corto plazo pueda votar sin miedo, con todas las garantías y pueda darse un gobierno que signifique un verdadero proceso de renovación y de vigencia de las instituciones democráticas, a fin de recuperar el estado de derecho en Santiago del Estero.

Sr. Presidente. — Queda cerrada la conferencia.

Sr. Pichetto. — Creo que corresponde votar las inserciones.

Sr. Presidente. — Se van a votar las inserciones.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.¹

3

VOTACION

Sr. Pichetto. — En aras de la celeridad de una definición política que ya tenemos, no vamos a aceptar modificaciones. Esto, además, generaría una vuelta a la Cámara de Diputados y creo que no hay tiempo ni espacio para hacer eso.

Así que nosotros vamos a pedir una sola votación en general y en particular del proyecto como ha venido de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. — Si hay acuerdo, así se hará.

Tiene la palabra el señor senador Losada.

Sr. Losada. — Nosotros no estamos de acuerdo porque tenemos discrepancias. Se puede votar en general y en particular en una sola votación cuando hay discrepancias. Por lo menos, vamos a plantear los artículos en los que creemos que hay que hacer modificaciones o aportes.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. — Quiero hacer una propuesta. Teniendo en cuenta la decisión del bloque mayoritario de no aceptar modificaciones, atento a la hora, sugeriría que el bloque del radicalismo acepte hacer todas las propuestas juntas, a fin de tenerlas presentes y después sí pasar a la votación. Digo esto para no tener que hacer las propuestas de modificación artículo por artículo, porque nos va a demorar mucho. Propongo esto a los fines de acelerar el trámite.

Sr. Presidente. — ¿Hay acuerdo con el procedimiento?

Sr. Losada. — No, no estamos de acuerdo con el procedimiento. Primero, en general, vamos a votar favorablemente. Está bien que seamos voluntariosos con la decisión del Ejecutivo, pero no tanto. Vamos a votar primero en general y después en particular, para no mezclar las cosas.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Marín.

Sr. Marín. — Solicito autorización para abstenerme de votar.

Sr. Presidente. — En consideración, se va a votar la autorización de la abstención solicitada por el señor senador Marín.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — ¿Estamos listos para votar el proyecto en general?

Sr. Pichetto. — Los que votamos por sí, vamos por la intervención.

Sr. Presidente. — Exactamente.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

¹ Ver el Apéndice.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52 votos afirmativos, dos votos negativos y una abstención.

Sr. Presidente. – La votación resulta afirmativa.

–El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.¹

Sr. Presidente. – En consideración en particular.

Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Vamos a formular las observaciones. En el artículo 4º proponemos que en lugar de “Poder Ejecutivo”, diga “Congreso de la Nación”; es decir que la prórroga por 180 días no sea facultad del Poder Ejecutivo, sino del Congreso Nacional.

Asimismo, planteamos la incorporación de un artículo 6º que diga así: “La Auditoría General de la Nación, en el marco de sus competencias, tendrá a su cargo el control sobre la intervención dispuesta en la presente ley”.

Esas son las modificaciones que vamos a proponer en particular. Los demás artículos los vamos a votar afirmativamente.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – No vamos a aceptar las modificaciones propuestas.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor Senador Gómez Díez.

Sr. Gómez Díez. – Simplemente deseo dejar constancia de que voy a votar negativamente el artículo 4º por considerar que debiera incluir la previsión de una convocatoria al pueblo de Santiago del Estero para la reforma de la Constitución provincial.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. – Como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la primera cosa que se me ocurre decir es que no podríamos sancionar este proyecto de ley violando nosotros mismos la Constitución. ¿Cómo vamos a imponer la reforma

de una Constitución provincial desde una ley nacional? Es imposible hacer eso, por cuanto en tal caso estaríamos sancionando una norma claramente violatoria de la organización federal del país.

La reforma de constituciones provinciales debe darse a través de mecanismos que prevén las propias constituciones. Así que es imposible abordar esto, por lo menos en el marco de legalidad constitucional, desde el Congreso de la Nación.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Gómez Díez.

Sr. Gómez Díez. – Considero que siendo necesario, para restablecer la forma republicana de gobierno, modificar la Constitución de la provincia en lo que hace al sistema electoral, es perfectamente posible que el interventor federal convoque a una elección de convencionales constituyentes en Santiago del Estero para que el pueblo resuelva la modificación constitucional. Ello hace al cometido de la intervención, que es el restablecimiento de la forma republicana de gobierno.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. – Desde el pacto fundacional de 1853 y luego de décadas de luchas, las provincias argentinas lograron que la Nación no pudiera introducirse en la organización de sus provincias. Lo que deben garantizar es la administración de justicia y la educación como únicas demandas por parte de la Nación para que se les garanticen sus autonomías. O sea, que nosotros le imponamos una reforma constitucional de la Nación es profundamente violatorio de la Constitución Nacional y de los pactos fundantes de la Constitución de 1853.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Gómez Díez.

Sr. Gómez Díez. – No quiero entrar en un debate doctrinario, pero voy a aclarar algo.

Nadie habla de imponer nada al pueblo santiagueño, sino de darle la oportunidad de que reforme sus instituciones, nada más. Esto es perfectamente posible y encuadra dentro de la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia, fundamentalmente a partir del caso “Orfila”.

¹ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Habiendo sido rechazada nuestra propuesta, vamos a clarificar el sentido de nuestro voto.

En tal sentido, señalo que el bloque radical va a votar afirmativamente los artículos 1º, 2º, 3º y 5º y negativamente el artículo 4º.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Entonces, se votarían en forma conjunta los artículos 1º, 2º, 3º y 5º y por separado el artículo 4º.

Por otro lado, señalo que no vamos a aceptar la propuesta que ha formulado el señor senador Gómez Díez.

Sr. Presidente. – En consecuencia, se van a votar los artículos 1º, 2º, 3º y 5º.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se han registrado 52 votos afirmativos, dos negativos y una abstención.

Sr. Presidente. – La votación ha resultado afirmativa.

–El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.¹

Sr. Presidente. – Se va a votar el artículo 4º.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 36 votos por la afirmativa, 18 por la negativa y una abstención.

–El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.²

–El artículo 6º es de forma.

Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

–Son las 3 y 50 del jueves 1º de abril de 2004.

RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

88

ASUNTOS ENTRADOS

I

La Presidencia informa que ha suscrito los siguientes decretos: de fecha 23 de marzo de 2004, por el que se designa al senador Pichetto, para cubrir una vacante en la Comisión Administradora la Biblioteca del Congreso de la Nación (D.P.P.-26/04). (*A sus antecedentes.*)

–Ha comunicado los siguientes despachos de comisión-proyectos, aprobados en los términos del artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable Cámara: de la Comisión de Salud y Deporte en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se declaran de interés diversos cursos internacionales sobre dolor para profesionales de la salud (S.-3.356/03).

–De las comisiones de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Latorre por el que se solicitan informes sobre el actual endeudamiento entre las obras sociales y los prestadores privados de salud (S.-3.332/03).

–De las comisiones de Salud y Deporte en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicitan informes acerca de la integración de la delegación argentina que participará en los Juegos Olímpicos de Grecia (S.-3.281/03).

–En el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicitan informes acerca de las tareas de fiscalización de entidades deportivas en el marco de la ley 20.665 (S.-3.273/03).

–En el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicitan informes acerca del cumplimiento de la resolución 1.106/10, que prohíbe la utilización del asbesto (S.-3.029/03).

II

Buenos Aires, 9 de marzo de 2004.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad a fin de solicitar, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, el acuerdo correspondiente para designar jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la doctora Carmen María Argibay (L. C. 6.623.409).

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

VOTACIÓN NOMINAL N° 4

Presidente: Scioli, Daniel O.
 Tipo de quórum: > 1/2 m.c.
 Presentes identificados: 55
 Presentes no identificados: 0
 Total de presentes: 55
 Ausentes: 17
 Votos afirmativos: 28

Fecha: 1º-4-2004
 Mayoría adoptada: > 1/2 LP
 Votos afirmativos: 52
 Votos negativos: 2
 Abstenciones: 1
 Resultado votación: afirmativa

Hora: 3h44'32"
 Miembros del cuerpo: 72

Nº	Legislador	Voto	Banca	Nº	Legislador	Voto	Banca
1	Cafiero, Antonio F.	Ausente		37	Jaque, Celso A.	Sí	2
2	Conti, Diana B.	Sí	63	38	Sanz, Ernesto R.	Sí	7
3	Müller, Mabel H.	Sí	17	39	Perceval, María C.	Sí	32
4	Castillo, Oscar A.	Sí	69	40	Losada, Mario A.	Sí	22
5	Saadi, Ramón E.	Ausente		41	Oviedo, Mercedes M.	Sí	52
6	Colombo de Acevedo, María T.	Sí	68	42	Puerta, Federico R.	Sí	51
7	Capitanich, Jorge M.	Sí	14	43	Gallia, Sergio A.	Sí	50
8	Curletti, Miriam B.	Sí	47	44	Salvatori, Pedro	Ausente	
9	Mastrandea, Alicia E.	Sí	41	45	Sapag, Luz M.	Ausente	
10	Guinle, Marcelo A.	Sí	35	46	Falcó, Luis A.	Ausente	
11	Giusti, Silvia F.	Sí	28	47	Isidori, Amanda M.	Ausente	
12	Massoni, Norberto	Sí	46	48	Pichetto, Miguel A.	Sí	15
13	Ibarra, Vilma L.	Sí	62	49	Escudero, Sonia M.	Sí	13
14	Terragno, Rodolfo	Ausente		50	Gómez Diez, Ricardo	Sí	9
15	Leguizamón, María I.	Sí	18	51	López Arias, Marcelo A.	Sí	16
16	Giri, Haide D.	Sí	57	52	Avelín, Nancy B.	Sí	72
17	Rossi, Carlos A.	Sí	71	53	Martinazzo, Luis	Sí	55
18	Urquía, Roberto D.	Sí	58	54	Martín, Floriana N.	Ausente	
19	Ríos, Roberto F.	Sí	12	55	Agúndez, Jorge A.	Sí	6
20	Sánchez, María D.	Sí	40	56	Negre de Alonso, Liliana T.	No	38
21	Banca no asignada	Ausente		57	Ochoa, Raúl E.	No	39
22	Bar, Graciela Y.	Sí	31	58	Fernández de Kirchner, Cristina	Sí	19
23	Martínez Pass de Cresto, Laura	Ausente		59	Fernández, Nicolás A.	Sí	20
24	Taffarel, Ricardo C.	Sí	24	60	Prades, Carlos A.	Sí	8
25	Lescano, Marcela F.	Sí	42	61	Giustiniani, Rubén H.	Sí	48
26	Mayans, Miguel A.	Sí	3	62	Latorre, Roxana I.	Ausente	
27	Paz, Elva A.	Sí	29	63	Reutemann, Carlos A.	Sí	60
28	Arancio De Beller, Lylia M.	Ausente		64	Castro, María E.	Sí	33
29	Jenefes, Guillermo R.	Ausente		65	Mera, Mario R.	Sí	49
30	Morales, Gerardo R.	Sí	21	66	Zavalía, José L.	Sí	23
31	Gallego, Silvia E.	Ausente		67	Caparrós, Mabel L.	Sí	37
32	Marín, Rubén	ABS	53	68	Capos, Liliana	Sí	45
33	Marino, Juan C.	Sí	44	69	Daniele, Mario D.	Sí	36
34	Maza, Ada M.	Sí	5	70	Bussi, Ricardo A.	Ausente	
35	Menem, Eduardo	Ausente		71	Miranda, Julio A.	Sí	54
36	Yoma, Jorge R.	Sí	34	72	Pinchetti de Sierra Morales, Delia	Ausente	

VOTACIÓN NOMINAL N° 5

Presidente: Scioli, Daniel O.
 Tipo de quórum: > 1/2 m.c.
 Presentes identificados: 55
 Presentes no identificados: 0
 Total de presentes: 55
 Ausentes: 17
 Votos afirmativos: 28

Fecha: 1°-4-2004
 Mayoría adoptada: > 1/2 LP
 Votos afirmativos: 52
 Votos negativos: 2
 Abstenciones: 1

Hora: 3h49'48"
 Miembros del cuerpo: 72

Resultado votación: afirmativa

N°	Legislador	Voto	Banca	N°	Legislador	Voto	Banca
1	Cafiero, Antonio F.	Ausente		37	Jaque, Celso A.	Sí	2
2	Conti, Diana B.	Sí	63	38	Sanz, Ernesto R.	Sí	7
3	Müller, Mabel H.	Sí	17	39	Perceval, María C.	Sí	32
4	Castillo, Oscar A.	Sí	69	40	Losada, Mario A.	Sí	22
5	Saadi, Ramón E.	Ausente		41	Oviedo, Mercedes M.	Sí	52
6	Colombo de Acevedo, María T.	Sí	68	42	Puerta, Federico R.	Sí	51
7	Capitanich, Jorge M.	Sí	14	43	Gallia, Sergio A.	Sí	50
8	Curletti, Miriam B.	Sí	47	44	Salvatori, Pedro	Ausente	
9	Mastrandea, Alicia E.	Sí	41	45	Sapag, Luz M.	Ausente	
10	Guinle, Marcelo A.	Sí	35	46	Falcó, Luis A.	Ausente	
11	Giusti, Silvia E.	Sí	28	47	Isidori, Amanda M.	Ausente	
12	Massoni, Norberto	Sí	46	48	Pichetto, Miguel A.	Sí	15
13	Ibarra, Vilma L.	Sí	62	49	Escudero, Sonia M.	Sí	13
14	Terragno, Rodolfo	Ausente		50	Gómez Díez, Ricardo	Sí	9
15	Leguizamón, María I.	Sí	18	51	López Arias, Marcelo A.	Sí	16
16	Giri, Haide D.	Sí	57	52	Avelín, Nancy B.	Sí	72
17	Rossi, Carlos A.	Sí	71	53	Martinazzo, Luis	Sí	55
18	Urquía, Roberto D.	Sí	58	54	Martín, Floriana N.	Ausente	
19	Ríos, Roberto F.	Sí	12	55	Agúndez, Jorge A.	Sí	6
20	Sánchez, María D.	Sí	40	56	Negre de Alonso, Liliana T.	No	38
21	Banca no asignada	Ausente		57	Ochoa, Raúl E.	No	39
22	Bar, Graciela Y.	Sí	31	58	Fernández de Kirchner, Cristina	Sí	19
23	Martínez Pass de Cresto, Laura	Ausente		59	Fernández, Nicolás A.	Sí	20
24	Taffarel, Ricardo C.	Sí	24	60	Prades, Carlos A.	Sí	8
25	Lescano, Marcela F.	Sí	42	61	Giustiniani, Rubén H.	Sí	48
26	Mayans, Miguel A.	Sí	3	62	Latorre, Roxana I.	Ausente	
27	Paz, Elva A.	Sí	29	63	Reutemann, Carlos A.	Sí	60
28	Arancio de Beller, Lylia M.	Ausente		64	Castro, María E.	Sí	33
29	Jenefes, Guillermo R.	Ausente		65	Mera, Mario R.	Sí	49
30	Morales, Gerardo R.	Sí	21	66	Zavalía, José L.	Sí	23
31	Gallego, Silvia E.	Ausente		67	Caparrós, Mabel L.	Sí	37
32	Marín, Rubén	ABS	53	68	Capos, Liliana	Sí	45
33	Marino, Juan C.	Sí	44	69	Daniele, Mario D.	Sí	36
34	Maza, Ada M.	Sí	5	70	Bussi, Ricardo A.	Ausente	
35	Menem, Eduardo	Ausente		71	Miranda, Julio A.	Sí	54
36	Yoma, Jorge R.	Sí	34	72	Pinchetti de Sierra Morales, Delia	Ausente	

VOTACIÓN NOMINAL N° 6

Presidente: Scioli, Daniel O.
 Tipo de quórum: > 1/2 m.c.
 Presentes identificados: 55
 Presentes no identificados: 0
 Total de presentes: 55
 Ausentes: 17
 Votos afirmativos: 28

Fecha: 1°-4-2004
 Mayoría adoptada: > 1/2 LP
 Votos afirmativos: 36
 Votos negativos: 18
 Abstenciones: 1

Hora: 3h50.35
 Miembros del cuerpo: 72

Resultado votación: afirmativa

N°	Legislador	Voto	Banca	N°	Legislador	Voto	Banca
1	Caffero, Antonio F.	Ausente		37	Jaque, Celso A.	Si	2
2	Conti, Diana B.	Si	63	38	Sanz, Ernesto R.	No	7
3	Müller, Mabel H.	Si	17	39	Perceval, Maria C.	Si	32
4	Castillo, Oscar A.	Si	69	40	Losada, Mario A.	No	22
5	Saadi, Ramón E.	Ausente		41	Oviedo, Mercedes M.	Si	52
6	Colombo de Acevedo, María T.	Si	68	42	Puerta, Federico R.	Si	51
7	Capitanich, Jorge M.	Si	14	43	Gallia, Sergio A.	Si	50
8	Curletti, Miriam B.	No	47	44	Salvatori, Pedro	Ausente	
9	Mastrandea, Alicia E.	No	41	45	Sapag, Luz M.	Ausente	
10	Guinle, Marcelo A.	Si	35	46	Falcó, Luis A.	Ausente	
11	Giusti, Silvia E.	Si	28	47	Isidori, Amanda M.	Ausente	
12	Massoni, Norberto	No	46	48	Pichetto, Miguel A.	Si	15
13	Ibarra, Vilma L.	Si	62	49	Escudero, Sonia M.	Si	13
14	Terragno, Rodolfo	Ausente		50	Gómez Diez, Ricardo	No	9
15	Leguizamón, María L.	Si	18	51	López Arias, Marcelo A.	Si	16
16	Giri, Haide D.	Si	57	52	Avelín, Nancy B.	Si	72
17	Rossi, Carlos A.	Si	71	53	Martinazzo, Luis	Si	55
18	Urquía, Roberto D.	Si	58	54	Martín, Floriana N.	Ausente	
19	Ríos, Roberto F.	Si	12	55	Agúndez, Jorge A.	No	6
20	Sánchez, María D.	No	40	56	Negre de Alonso, Liliana T.	No	38
21	Banca no asignada.	Ausente		57	Ochoa, Raúl E.	No	39
22	Bar, Graciela Y.	Si	31	58	Fernández de Kirchner, Cristina	Si	19
23	Martínez Pass de Cresto, Laura	Ausente		59	Fernández, Nicolás A.	Si	20
24	Taffarel, Ricardo C.	No	24	60	Prades, Carlos A.	No	8
25	Lescano, Marcela F.	No	42	61	Giustiniani, Rubén H.	No	48
26	Mayans, Miguel A.	Si	3	62	Latorre, Roxana I.	Ausente	
27	Paz, Elva A.	Si	29	63	Reutemann, Carlos A.	Si	60
28	Arancio de Beller, Lylia M.	Ausente		64	Castro, María E.	Si	33
29	Jenefes, Guillermo R.	Ausente		65	Mera, Mario R.	Si	49
30	Morales, Gerardo R.	No	21	66	Zavalía, José L.	No	23
31	Gallego, Silvia E.	Ausente		67	Caparrós, Mabel L.	Si	37
32	Marín, Rubén	ABS	53	68	Capos, Liliana	No	45
33	Marino, Juan C.	No	44	69	Daniele, Mario D.	Si	36
34	Maza, Ada M.	Si	5	70	Bussi, Ricardo A.	Ausente	
35	Menem, Eduardo	Ausente		71	Miranda, Julio A.	Si	54
36	Yoma, Jorge R.	Si	34	72	Pinchetti de Sierra Morales, Delia	Ausente	

encontrándose en pleno desarrollo el proceso de preselección de los candidatos (candidatos nacionales de las partes consultivas).

Se prevé que al cumplimentarse las tres condiciones mencionadas precedentemente la secretaría comenzará a funcionar en el segundo semestre del presente año.

La urgencia de la aprobación del presente proyecto de ley, que cuenta con dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de esta Honorable Cámara, se debe a que la Argentina en la última reunión consultiva expresó su compromiso de aplicar provisionalmente el acuerdo de sede, a partir de la fecha en que nuestro país notifique al gobierno depositario habiendo dado cumplimiento al requisito constitucional de aprobación legislativa, y la circunstancia de que como ya se dijo anteriormente, la próxima reunión se llevará a cabo el 24 de mayo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Por consiguiente, el presente proyecto de ley que estamos considerando debe ser aprobado con la antelación suficiente para efectuar en tiempo y forma, antes de la reunión de Ciudad del Cabo, la comunicación correspondiente al gobierno de los Estados Unidos de América en su carácter de país depositario.

ANTECEDENTES

El Tratado Antártico fue suscrito en la ciudad de Washington el 10 de diciembre de 1959, ratificado por la República Argentina por ley 15.802 en mayo de 1961 (junto a otros países como Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Unión del Africa del Sur, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América).

Cabe hacer notar que la secretaría permanente no se encontraba contemplada en el Tratado Antártico mencionado más arriba.

En la XXIV Reunión de Partes Consultivas del Tratado Antártico, llevada a cabo en San Petersburgo en julio del 2001, se adoptó la Decisión 1 (2001) que prevé que una secretaría permanente funcione en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. A partir de allí, luego de reuniones que la República Argentina llevó adelante, informalmente, con las partes consultivas en la ciudad de Buenos Aires (entre el 24 y 27 de junio de 2002 y del 1º al 4 de abril de 2003) para avanzar sobre ese objetivo, se llega a la XXIV Reunión de Partes Consultivas del Tratado Antártico (RCTA) en Madrid, en el mes de junio de 2003, donde se adoptaron instrumentos constitutivos de la secretaría que integran la Decisión I (2003), prorrogo de las contribuciones a la Secretaría del Tratado Antártico; Decisión 3 (2003), Reglamento del Personal de la Secretaría del Tratado Antártico; Decisión 4 (2003), Reglamento

Financiero de la Secretaría del Tratado Antártico, adoptadas todas ellas en la XXVI Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) de Madrid (junio de 2003).

El Acuerdo de Sede para la Secretaría del Tratado Antártico fue adoptado como anexo de la Medida I (2003) regulando lo relativo a las facilidades, privilegios e inmunidades de la secretaría, y del secretario ejecutivo y su personal, de conformidad con el derecho internacional, así como la personería jurídica de ese órgano en la República Argentina.

Ahora bien, la entrada en vigor del Acuerdo de Sede para la Secretaría del Tratado Antártico, se condiciona al inicio de la vigencia de la Medida I (2003), medida que dispone que el acuerdo será firmado en nombre de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) por su presidente. Pero, teniendo en cuenta que la entrada en vigor de dicha medida sólo puede tener lugar cuando todas las partes consultivas lo hayan aprobado, proceso éste que llevará varios años, resultó necesario, prever la aplicación provisional de ese acuerdo de sede por parte de la República Argentina, para lo cual la República Argentina debe aprobar parlamentariamente la Medida I (2003) y su anexo sobre el acuerdo de sede. Es así como la República Argentina asumió por carta compromiso firmada el 16 de junio de 2003, mediante la aprobación de la Decisión 2 (2003), el cumplimiento de la aprobación parlamentaria en su país y la notificación posterior al país depositario, a efectos de que se pueda proceder a la aplicación provisional de la Medida I (2003), relativa a la vigencia del Acuerdo de Sede para la Secretaría del Tratado Antártico.

5

Solicitada por el señor senador Ochoa

Intervención federal a Santiago del Estero

Señor presidente:

Ante todo quiero destacar que mi voto responsable, respecto a este proyecto de intervención federal a la provincia de Santiago del Estero, debió ser con toda la prudencia y responsabilidad que exige la aplicación de una medida de carácter extraordinario y de excepción. Y ello es así, ya que esta institución es un remedio que debe usarse restrictivamente en determinados casos que por su gravedad no permitan solucionarse por otra vía.

Pero me encuentro hoy imposibilitado en el tiempo para fundamentar ese voto prudente y responsable, toda vez que de ninguna manera cuento con el tiempo necesario para ese estudio concienzudo y responsable que requiere la medida que estamos tratando. Con ello voy adelantando que conforme mi criterio, de ninguna manera voy a hacer lugar a una medida de excepción, si los argumentos vertidos no son prima facie contundentes para fundamentar la intervención que dispone el proyecto.

Respecto a la norma constitucional que contiene esta institución, es decir el artículo 6º de nuestra Constitución Nacional, debemos tener presente que sólo es aplicable en este caso la primera parte de la misma, cuando habla de que el gobierno federal interviene en las provincias "...para garantizar la forma republicana de gobierno..."

Entonces siempre teniendo presente la prudencia que requiere la aplicación de este remedio de excepción, y siempre teniendo presente que estamos invadiendo una autonomía provincial, pasé a analizar las causales que fundamentan el pedido de intervención para ver si realmente está destruida la forma republicana de gobierno en la provincia de Santiago del Estero.

Y vemos en primer lugar que se habla de "...negligencia y lentitud en la gestión administrativa...". Ello de ninguna manera pone en peligro la forma republicana de gobierno, ya que es de público y notorio la burocracia administrativa en cualquier administración pública. Vale decir, esto no es un capital exclusivo de la provincia en cuestión, sino que es patente argentina en toda su administración.

Tampoco es causal el "...casi nulo respeto a los derechos laborales de los agentes del Estado provincial...", ya que el ámbito de su discusión lo es en plano administrativo o judicial a través de las organizaciones sindicales y organismos estatales respectivos.

Se habla de la existencia de denuncias a los integrantes al Poder Legislativo de la provincia. Ello tiene solución en el plano de la misma Legislatura y en el Judicial si correspondiere. De ninguna manera puede intervenir un Poder Legislativo, por la sospecha de que algunos de sus integrantes, ya que como todos sabemos, somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Pero justamente por el trabajo "político" que llevan a cabo los legisladores y estando mucho más expuestos, es que tienen los fueros que les da su investidura, por lo que mal podemos remediar ello a través de la intervención federal.

En lo que respecta al Poder Judicial, se habla de "...su falta de independencia del poder político...". Pero, ¿quién lo dice con el conocimiento acabado del accionar de dicho poder? ¿Alguien ha visto las causas falladas en la provincia? O acaso vamos a intervenir porque se diga ligeramente que en Santiago del Estero "no hay justicia". O acaso no escuchamos todos los días que "en la Argentina no hay justicia". Y puede ser que deban producirse algunos cambios para mejorar el servicio de justicia en el territorio nacional. Pero esto tampoco, es patrimonio exclusivo de la provincia de Santiago del Estero, y menos aún la justificación para una intervención federal.

Personalmente entiendo que el proyecto de intervención que estamos estudiando, es la respuesta a

una opinión pública sensibilizada por los medios de comunicación. Porque si lo medimos concretamente por las "movilizaciones populares" de distintos sectores de la comunidad santiagueña, encontramos en el día de ayer una "movilización popular" a favor del gobierno santiagueño. Ello nos permite concluir que no debemos dejarnos llevar por la pasión instalada por los medios de comunicación, y sí efectuar un análisis profundo y responsable de la situación en la provincia de Santiago del Estero.

Llamo nuevamente a la reflexión a mis colegas senadores, para que en lo sucesivo tomemos los problemas que debemos enfrentar con verdaderas soluciones de fondo, y no como en este caso, que debemos aprobar una intervención federal sin un mínimo análisis de la cuestión y sin el debido debate.

En base a ello mi voto será por la negativa en general y particular, porque esta gravísima medida que destruye la autonomía de un Estado provincial, debió analizarse con todo el respeto y responsabilidad que merece.

6

Solicitada por la señora senadora Escudero

Intervención a Santiago del Estero

Ya enseñaba Joaquín V. González que nuestro sistema federativo forma una nación indestructible de estados o provincias indestructibles; y en tal caso la misión de la primera es protectora y orgánica, y no de destrucción y castigo sobre las segundas (*Manual de la Constitución Argentina*, pág. 713).

En esta ocasión estamos convocados porque se nos solicita como Congreso disponer el último remedio en uno de aquellos estados indestructibles que conforman nuestra Nación, sobre la base de una presunta violación al principio de independencia de poderes, y, por ende, a la forma republicana de gobierno.

Es decir, se está planteando una intervención de las denominadas "por derecho propio", sin que sea solicitada por la jurisdicción afectada ni se enmarque en una invasión exterior. En ese sentido, el remedio se halla limitado en sus fines: garantizar la forma republicana de gobierno, defender y mantener inviolable el principio esencial al gobierno de la Nación.

Y la forma republicana de gobierno es aquella que reconoce en el pueblo la fuente única toda autoridad política, y el derecho de gobernarse por sí mismo; pero requiere como condición esencial la existencia de elementos representativos de su voluntad.

Pero no cualquier situación de hecho configura una ofensa a tal sistema. Debe tener la entidad suficiente, demostrada, para erigirse en obstáculo al normal funcionamiento de las instituciones.

Y tal gravedad es requerida, y debe ser racionalmente demostrada, toda vez que la decisión que

tome este Congreso en uno u otro sentido forma parte de sus atribuciones específicas, exenta de control judicial, pues conforma aquel escueto espacio que se ha denominado "acto político no justiciable", como lo dejó sentado en repetidas ocasiones la Corte Suprema de Justicia con diferentes composiciones.

Una larga serie de precedentes jurisprudenciales así lo expresa, entre los que podemos citar Cullen c./Llerena ("Fallos", 53:420); Lobos c./Dónovan ("Fallos", 54:180); Compañía Azucarera Tucumana S.A. c./Tucumán ("Fallos", 141:271); Alejandro Orfila ("Fallos", 154:192); Cernadas c./Santa Fe ("Fallos", 184-639); Samuel Siganevich ("Fallos", 177:390); Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes ("Fallos", 315:1.673), y Rossi Cibilis ("Fallos", 315:2.074).

Allí se sostuvo que "la intervención nacional en las provincias, en todos los casos que la Constitución la permite o prescribe, es, como queda dicho, un acto político por su naturaleza, cuya verificación corresponde exclusivamente a los poderes políticos de la Nación" y "[...] la intervención es de resorte de los poderes políticos, y sus decisiones al respecto, no pueden ser controvertidas por el departamento judicial, no pueden contestarse las facultades de aquéllos para decidir tanto sobre el fondo, como sobre la forma de sus deliberaciones" y "notoriamente se hallan al margen de la potestad jurisdiccional de esta Corte Suprema, las cuestiones de orden política, se colocaría frente a los poderes políticos del Estado, en el terreno político, desnaturalizando su carácter".

Es así, entonces, que no existe poder por encima de este Congreso en la toma de una decisión de tal gravedad institucional, ni juez sobre la compatibilidad con la Ley Fundamental respecto de las razones invocadas para disponerla.

Llegamos entonces a la piedra de toque del diseño y la aplicación del instituto, cual es la valoración del soporte fáctico de la situación y de la forma en que el sistema republicano se ve herido.

A nadie escapa que la situación en la provincia de Santiago del Estero es crítica. A nadie escapa que hay manifestaciones de esa crisis a diario en el ámbito local. Lo que debemos decidir es si tales extremos afectan, y de qué modo, a la forma republicana de gobierno, y si tal afectación guarda adecuada simetría con el remedio que se pretende aplicar.

Creo que si revisten entidad suficiente los motivos invocados para ameritar la intervención, en tanto se niegan o alteran derechos reconocidos y garantizados por la Constitución Nacional a todo ha-

bitante, y frustran el delicado equilibrio de frenos y contrapesos que, entre los poderes constituidos debe existir.

En primer lugar, no corresponde desconocer las múltiples denuncias que respecto de inseguridad, libertad de expresión, violación del debido proceso y abuso de autoridad existen. Ello en cuanto a los derechos de los particulares, garantizados por el orden federal.

En el segundo de los órdenes citados, aparece como evidente que la libre conformación de voluntad del Poder Legislativo se ve, como mínimo, afectada. Los recientes acontecimientos contribuyen a robustecer esa impresión.

Las imputaciones sobre la actuación de la administración pública —en sus cuadros inferiores— invocada por el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, distan de autosostenerse, creo que debería haberse brindado información un poco más desagregada sobre los extremos invocados. Pero surge de la realidad y es indudable que se ha perseguido, a través de nombramientos en cargos que conforme el orden constitucional local garantizan inmunidad, eludir el correcto accionar de la Justicia.

Respecto de la situación del Poder Judicial, el hecho de la cantidad de denuncias constituye un indicio, pero hasta su trámite no es posible determinar su certeza. En este aspecto, considero que el mensaje 367 debió ser más analítico y circunstanciado.

Es tarea de este Congreso, al fin, garantizar la forma republicana de gobierno. Por ello, señor presidente, voy a apoyar este proyecto. Hubiera sido deseable que la crisis de la provincia de Santiago del Estero hubiera encontrado cauce en la propia respuesta de sus habitantes. Pero, al parecer, se han agotado los medios políticos, oficiosos y constitucionales para evitar este remedio. A pesar de ello, no puede resultar más que dolorosa la decisión de intervención. Pone en evidencia el quiebre de esa dualidad de respeto simétrico entre la Nación y el concierto de las provincias de la que hablara también Joaquín V. González. Quiero expresar mi solidaridad con el pueblo santiagueño y hacer votos para que la persona que sea designada regularice la situación provincial en el menor tiempo posible.

Creo, en mi ámbito personal de convicciones y contrastando con los datos objetivos de la realidad, que están dadas las condiciones de intervención, que ésta debe ser lo más reducida posible en el tiempo, a fines de normalizar el sano ejercicio de los derechos y retornar al equilibrio.